

Capítulo IV

ENTRE LA POBREZA Y EL RIESGO DE PAUPERIZACIÓN

EN EL PRESENTE CAPÍTULO se abordan los cambios ocurridos en el campo de las posibilidades de integración social mostradas por la sociedad costarricense, una vez que las reformas estructurales de carácter neoliberal han madurado. El capítulo se articula en cuatro secciones. La primera describe los hallazgos en materia de inclusión social partiendo del modelo que diferencia a los hogares según condición de pobreza. La segunda muestra los perfiles de pobreza a partir de análisis bivariados. La tercera se centra en el estudio de los factores condicionantes de la probabilidad de que un hogar sea pobre. La última sección discute la emergencia del riesgo de pauperización como un fenómeno propio del nuevo modelo de acumulación y esboza una primera propuesta de cuantificación sobre el particular.

LA PERSISTENCIA DE LA POBREZA

Tres tendencias emergen con claridad en la evolución de la pobreza en Costa Rica en la década del noventa. En primer lugar, un marcado incremento de los hogares con insuficiencia de ingresos para cubrir sus necesidades básicas en los primeros años del período. Específicamente, entre 1990 y 1991, años en los cuales se acentuó la ejecución de las políticas de cambio estructural y se abogó por un enfoque menos heterodoxo. Segundo, una reducción de los niveles de pobreza a partir de 1992 que alcanza su punto más álgido en 1994, cuando el porcentaje

de hogares pobres se ubicó en el nivel observado a finales de la década del setenta. Tercero, un estancamiento en la incidencia de la pobreza, la cual ha oscilado en alrededor del 20% de los hogares desde 1995 en adelante. Esto último ha puesto en evidencia que existe un núcleo duro de hogares pobres. Su permanencia en el tiempo recuerda las deudas sociales pendientes de la sociedad costarricense con la población de menores recursos.

El comportamiento errático de la evolución de la pobreza en los últimos quince años acontece en un contexto de profundización de las reformas estructurales. De hecho, hacia fines de la década del noventa, las políticas de cambio estructural alcanzaron una fase madura. Como consecuencia, en varias coyunturas emergió una fuerte disputa entre las organizaciones sociales y los promotores de las políticas de cambio estructural. Por esta vía se ha hecho manifiesta la existencia de un amplio disenso social sobre el futuro de la sociedad costarricense. El pacto social de largo aliento en que se asentó la consolidación del sistema democrático costarricense y el modelo reformista sustentado en el patrón de acumulación previo se ha erosionado. Esto ha dado lugar a la emergencia de nuevas manifestaciones de desigualdad social, así como a una reactivación de las pugnas distributivas. Los sectores medios han protagonizado una parte significativa de las luchas distributivas a lo largo de la década mencionada, que pone en evidencia que su posición social y su función política como estrato que equilibraba los conflictos sociales están cambiando.

En materia de programas de integración social, la ausencia de una política de Estado ha sido crónica. Aunque la inversión social dirigida a los programas sociales de corte universalista recuperó a finales de la década del noventa los niveles alcanzados antes de la crisis de la deuda (Estado de la Nación, 2005), no sucedió lo mismo con su calidad. El principal esfuerzo desplegado por el país, durante ese período, se centró en recuperar los niveles de inversión social anteriores a la crisis. A pesar de constituir un gran avance, esto no ha sido suficiente para revertir el deterioro en la calidad de los servicios de educación y salud y el rezago acumulado en materia de infraestructura y tecnología en estos campos en las dos últimas décadas. Lo acontecido con otras políticas sociales ha sido más crítico, pues los recursos han sido escasos, su administración ineficiente y las directrices fueron cambiantes (Valverde et al., 1993b).

Durante la década del noventa ganaron espacio la racionalización del gasto público y el desarrollo de políticas sociales circunscritas al impulso de programas sustentados en el enfoque de focalización inspirado en los planteamientos de organismos internacionales. Dado el carácter coyuntural de este tipo de política, los nuevos programas

sociales fueron presa fácil de los vaivenes electorales y los cálculos políticos. El país se quedó sin orientación estratégica en este campo. Los programas focalizados emergieron más como una fuente para la construcción de clientelas electorales restringidas y transitorias que como un medio para el fomento de la expansión de la ciudadanía social. La integración social de largo plazo fue cediendo terreno a los imperativos electorales y a la mitigación cortoplacista de las consecuencias del ajuste estructural entre los grupos más pobres.

Lo anterior evidenció la creciente desarticulación entre la evolución de la política social y las políticas orientadas a constituir un nuevo modelo de acumulación. Hasta finales de la década del setenta, la política social estuvo articulada con el desarrollo económico (Barahona et al., 1999). Sin embargo, desde mediados de la década del ochenta, esta articulación se ha perdido. La disociación entre política social y ciclo de acumulación no ha favorecido, hasta la fecha, un relanzamiento de la primera. Desde el inicio de la aplicación de las políticas de ajuste, se observó un debilitamiento de las políticas redistributivas. Los imperativos de acumulación privada, ahora de corte globalizado, ganaron espacio sobre las preocupaciones relacionadas con el fomento de esquemas sociales de amplio espectro.

De igual modo, durante la fase de consolidación del nuevo modelo económico, emergió una nueva tensión en el campo de la política social. Esta se expresó en términos de la importancia relativa que debía asignárseles a las políticas de focalización del gasto en contraposición con las políticas de carácter universalista. Si bien en el caso de Costa Rica el desarrollo de políticas del primer tipo no supuso la eliminación de las políticas universales, sí implicó modificaciones sustantivas en el diseño y ejecución de la política social (Valverde et al., 1993b).

Desde la primera administración del presidente Arias (1986-1990), los sucesivos gobiernos han definido un plan de combate a la pobreza centrado en un área específica. Estos planes han tenido una duración pasajera; en el mejor de los casos, su temporalidad ha alcanzado el período de gobierno del presidente de turno. La falta de un consenso nacional sobre el rumbo que ha de tomar la política social, así como una visión restringida de la misma en razón de los requerimientos del modelo de acumulación actual, han marcado el fin de una época. Los años gloriosos de la política social costarricense parecen ser cosa del pasado. La centralidad que ocupó este tipo de políticas en el pasado ha sido desplazada. Las visiones de corto plazo y los esquemas de integración restringida han predominado.

Durante el primer gobierno de Arias, se dio especial énfasis al desarrollo de un programa de vivienda popular orientado a buscar una respuesta institucional a lo que por esa época constituía el área de ma-

yor conflictividad social, en particular en espacios urbanos. Este plan emergió como resultado de un compromiso electoral entre el entonces candidato a presidente por el Partido Liberación Nacional y las principales organizaciones de lucha por la vivienda del momento, creándose una nueva institucionalidad en este sector y canalizando, por la vía institucional, la demanda social en este campo (Mora Salas y Solano, 1995). Se trató de una política social de amplia cobertura, aunque su ejecución implicó el descuido de otros sectores sociales. Además, en materia socioterritorial, creó las condiciones para el desarrollo de un intenso proceso de reorganización del espacio urbano que, a la postre, desencadenó un proceso creciente de segregación urbana (Mora Salas y Solano, 1995; Estado de la Nación, 2005).

Por su parte, durante el gobierno del presidente Calderón Fournier (1990-1994), la prioridad se trasladó hacia la conformación de un programa dirigido al cuidado infantil, el programa de Hogares Comunitarios. Por este medio se buscaba generar una alternativa para atender los requerimientos de cuidado infantil de los sectores populares. Simultáneamente, se iniciaban acciones para el cierre del programa de Comedores Escolares, lo cual ponía en perspectiva el interés de los programas sociales a cargo del Estado (Valverde et al., 1993b). El nuevo programa, además de su carácter focalizado, pretendía incorporar a mujeres de sectores populares a una estrategia de generación de empleo en el ámbito comunitario como forma de aumentar los ingresos de esas familias⁵¹. Se intentaba así atemperar el impacto social de un esquema de política económica más afín a los enfoques ortodoxos. Adicionalmente, emergió el reparto de bonos (alimentario, escolar y vivienda) como el sello distintivo de las nuevas políticas sociales focalizadas.

En la administración siguiente, del presidente Figueres Olsen (1994-1998), se discontinuó el programa de Hogares Comunitarios y la distribución de bonos como eje articulador de la acción estatal en materia de política social. En su lugar se enfatizó en la recuperación de la inversión social en los programas de corte universal. Particular importancia recibió el impulso a los programas de reforma del sector salud y, especialmente, al desarrollo de una nueva estrategia denominada Equipos Básicos de Atención Integral. De igual manera, la recupe-

51 En el texto, los términos familia y hogar se usan de forma intercambiable con el fin de hacer la lectura menos monótona. En sentido estricto, siempre que aparezca la noción familia debe entenderse hogar, ya que esta es la unidad de análisis en las encuestas de hogares y en las estimaciones de pobreza. Pese a que no todo hogar constituye una familia y que una familia puede estar integrada por más de un hogar. La diferencia deriva en que el criterio para la definición de relaciones de familia es de carácter cultural y biológico, en tanto que para la definición de un hogar predomina el criterio económico, traducido en la noción de un presupuesto común para la atención de las necesidades básicas.

ración de la inversión en el sector educación y el combate de la brecha educativa entre la educación privada y la pública se consideraron de trascendental importancia. Pero, en materia de combate a la pobreza, el programa clave lo constituyó uno centrado en la atención “integral” de las necesidades de las 20 comunidades más pobres del país. Se trató de un esfuerzo que intentó vincular la focalización social con la territorial, centrando la atención sobre las comunidades identificadas como de atención prioritaria. Debido a restricciones financieras, derivadas de pugnas políticas al interior del equipo de gobierno, el programa terminó sufriendo una doble restricción. Primero se pasó de 20 a 15 comunidades prioritarias. Luego pasó de constituir planes de intervención integral a la realización de diagnósticos comunitarios participativos que fijarían las prioridades de inversión futura. El lapso temporal de la administración Figueres Olsen fue insuficiente para hacer realidad los diagnósticos realizados.

En la gestión del presidente Rodríguez (1998-2002) se discontinuó el programa de atención integral de las 20 comunidades más pobres y los esfuerzos fueron canalizados hacia el impulso de un nuevo programa denominado Triángulo de Solidaridad. Mediante una estrategia que buscaba movilizar los recursos de las comunidades, los gobiernos locales y las instituciones del gobierno central, se trataba de gestar una nueva dinámica de combate a la pobreza. En definitiva, el programa buscaba la focalización territorial de los recursos dirigidos al combate a la pobreza y el desarrollo de una dinámica de concertación social en el ámbito local. Con ello se intentaba identificar las necesidades prioritarias de cada localidad y desarrollar planes estratégicos diseñados para la atención de tales necesidades. Estos esfuerzos se complementaron con el desarrollo de programas innovadores en materia del accionar de las instituciones del sector social. Por la importancia asignada, se destacó la constitución de un registro único de beneficiarios de los programas sociales a cargo del Instituto Mixto de Ayuda Social, denominado Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO). Con la ejecución de este sistema se buscaba, por un lado, evitar la “filtración” de familias no pobres en los programas focalizados y, por otro, tener un control estricto sobre la cantidad de recursos transferidos a cada una de las familias pobres para evitar los *abusos* de los beneficiarios.

Finalmente, en la administración del presidente Pacheco (2002-2006), al igual que en anteriores gestiones, se interrumpió el programa lanzado en la administración que le precedía y se definió una nueva estrategia de combate a la pobreza. El Plan Vida Nueva fue promocionado como el núcleo rector de la política social del nuevo gobierno. El rasgo central de esta *nueva estrategia* consistió en favorecer un mayor acceso de la población pobre a los servicios sociales a cargo de las instituciones

públicas. Se intentaba ofrecer a los sectores populares mayores *oportunidades* para la satisfacción de sus necesidades básicas. Esto estaba acompañado de una estrategia de capacitación laboral dirigida a los sectores más pobres, con el fin de mejorar su nivel de empleabilidad. El supuesto es que ello redundaría en una mejor (re)inserción de los pobres en el mercado laboral, con lo cual sus ingresos se elevarían, promoviéndose de esta forma una dinámica de superación de la pobreza. El rasgo más destacado de la política social de la administración Pacheco fue su ineficiencia. Así, al término de su mandato presidencial, el Plan Vida Nueva no había logrado traducirse en orientaciones programáticas sistemáticas⁵².

Cuatro rasgos marcan la transición de este tipo de política social. Primero, todos estos planes responden a una lectura particular sobre las causas que dan origen a los procesos de pauperización y reproducción de la pobreza. Con lo cual procuran instaurar nuevas estrategias de intervención, redefinir las funciones de las instituciones sociales y conferirle al Estado mayor efectividad en su accionar. Segundo, todos buscan responder a los efectos generados por la instauración del nuevo modelo de acumulación sin alterar las causas que dan lugar a la pobreza en la Costa Rica contemporánea. Tercero, todos han tenido una vida temporal limitada, que no supera, en ninguno de los casos, el período de un gobierno. Cuarto, todos constituyeron acciones marginales. El combate a la pobreza, aunque se ha definido en el terreno del discurso como un campo de acción estratégico, ha carecido de una estrategia de largo plazo, consensuada entre actores políticos y fuerzas sociales. Ninguno de estos proyectos, quizás con la excepción del programa de vivienda popular de la administración Arias Sánchez (1986-1990), constituyó una acción estratégica en materia de integración social.

El enfoque predominante en los planes de pobreza impulsados a partir de 1990 ha sido tratar la pobreza como un efecto residual de los cambios que en materia económica se adoptaron para asentar las bases del nuevo modelo de acumulación. Esto, en parte, explica el estancamiento que el país mostró en el terreno a partir de 1995. El supuesto imperante ha sido que, una vez consolidado el nuevo modelo de acumulación, este generaría un dinamismo económico que de manera progresiva se traduciría en mayores oportunidades de empleo y mejores

⁵² Como era de esperarse, el nuevo gobierno electo en febrero de 2006, encabezado por el presidente Arias Sánchez, ha anunciado que en su administración se otorgará prioridad al combate a la pobreza. Desde ya se anuncia el desarrollo de un plan nacional en este campo, cuyas orientaciones, características y detalles no han salido a la luz pública. Empero, a todas luces, implica hacer *borrón y cuenta nueva*. Es decir, supone dejar de lado las directrices formuladas sobre este tema por los anteriores gobiernos, en tanto las mismas sean juzgadas como inútiles en su cometido.

remuneraciones. En consecuencia, la pobreza sería resuelta no desde la política social sino por la propia dinámica del ciclo económico. La política social cumple en este enfoque un rol subsidiario y subordinado al ciclo de acumulación. Corrige los desajustes del mercado imputados a la falta de buenos atributos de las familias pobres (capital humano, por ejemplo), sin alterar las reglas del juego en el campo económico.

Los datos de 2003 muestran que los supuestos subyacentes en ese planteamiento están lejos de cumplirse. Las estimaciones oficiales reportaron que la incidencia de la pobreza fue de un 18,7%, ligeramente inferior a la incidencia medida en 2002. Las explicaciones predominantes señalaron que la reducción en el índice de la pobreza era espuria. La reducción observada no era producto de una mejoría de las condiciones de vida de los sectores pauperizados, sino de una evolución diferenciada del índice de inflación. Así, entre julio de 2002 y julio de 2003, el índice de la canasta básica alimentaria habría reportado una tasa de crecimiento inferior al índice de precios al consumidor (inflación). Como los valores monetarios de las líneas de pobreza se ajustan considerando la inflación del primer índice, entonces, es posible que un número mayor de hogares se presenten satisfaciendo sus necesidades básicas cuando en la realidad no lo están haciendo. De hecho, en ese año, se ha determinado que los hogares pobres perdieron participación en la distribución del ingreso total; también, que su ingreso promedio se deterioró y que el desempleo se incrementó (Estado de La Nación, 2005).

La reducción de la incidencia de la pobreza de 2002 es atribuible a un efecto umbral y no a una mejoría en las condiciones de vida de la población. Esto quedó evidenciado en 2004 cuando la incidencia de la pobreza entre los hogares volvió a crecer, ubicándose ahora en 21,7%. Esta cifra retrotrae la situación general del país al nivel de 2001, pero, como señalamos previamente, la incidencia de la pobreza afecta a dos décimas partes de los hogares costarricenses desde mediados de la década del noventa.

Cuadro 17
Costa Rica. Hogares según condición de pobreza, julio de 2003

Nivel	Total	Porcentaje
Pobres extremos	76.267	8,4
Pobres relativos	160.825	17,7
No pobres*	672.776	73,9
Total	909.868	100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EHPM.

* No incluye 141.738 hogares con ingreso ignorado.

Mora Salas (2004) ha demostrado que, además de lo citado, la medición oficial de la pobreza en Costa Rica muestra otro tipo de limitaciones de gran envergadura que terminan subestimando de manera considerable la población con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Los datos presentes en el Cuadro 17 son estimaciones de la pobreza en las cuales se ha eliminado, por razones de inconsistencia, la práctica de ajustar el ingreso de los hogares, que constituye uno de los procedimientos clave en las estimaciones oficiales de pobreza en el país.

La información presentada en el Cuadro 17 muestra que poco más de una cuarta parte de los hogares costarricenses, con ingreso conocido, presentaban insuficiencia de ingresos. Quizás la primera observación que es preciso señalar es que este dato está muy próximo a los valores observados en 1980. Si bien los datos de estos años no son comparables entre sí, por razones metodológicas⁵³, indican una tendencia importante. A diferencia de lo acontecido entre 1950 y 1980 cuando Costa Rica experimentó un proceso abierto de reducción de la pobreza, en un contexto marcado por la movilidad social ascendente, entre 1987 y 2003 el país no sufrió cambios significativos en la cantidad de hogares en condición de pobreza. Nos referimos al total de hogares pobres y no a su evolución relativa, pues en este caso, como se mostró en el Capítulo II, sí ocurrió una reducción importante en el período 1992-1994, y un estancamiento entre 1995 y 2004.

Medido en términos absolutos, este contraste es más evidente si se hacen las siguientes anotaciones. Entre 1971 y 1977, período de auge del modelo desarrollista, Costa Rica logró reducciones absolutas en el total de hogares pobres. En el primer año, se ha estimado que existían 121.000 hogares pauperizados, mientras que en el segundo la cifra había descendido a 98.000. En siete años, 23.000 hogares superaron las privaciones materiales ligadas a la insuficiencia de ingresos (Trejos, 1990). Entre 1987 y 2004, el número de hogares pobres, medidos según

53 En 1980 hemos usado el valor de una canasta alimentaria que tenía sólo 14 alimentos. Supone además trabajar con el concepto de adulto equivalente. Para 2003, trabajamos con una “nueva” canasta alimentaria construida en 1995 con base en la encuesta de ingresos y gastos de los hogares de 1987. En promedio, esta canasta considera 44 productos, pero es diferenciada por zona urbana y rural. Adicionalmente, los coeficientes de multiplicación para pasar del valor de la canasta alimentaria, es decir, de la línea de pobreza extrema, a la línea de pobreza, lo que técnicamente se conoce como el inverso del coeficiente de Engel, son diferentes si se utiliza el valor de la canasta alimentaria vieja que si se utiliza la “nueva”. En general, se ha observado que el valor de la nueva canasta alimentaria es superior al de la anterior. Pero no sólo difieren los costos de las canastas alimentarias, sino también el concepto y amplitud de ingresos reportados en las encuestas de hogares. Los de 1980 son más restringidos que los de 2003. Esta es una diferencia introducida en 1987 cuando se hicieron ajustes mayores al diseño de las encuestas de hogares, imposibilitando las comparaciones antes y después de este año.

la metodología del INEC, pasó de 126.673 a 208.680, respectivamente. En este periodo, 41.921 hogares pasaron a engrosar las filas de la pobreza. Movilidad descendente y/o dificultades para desencadenar procesos de inclusión social de amplia cobertura parecen dos de los rasgos centrales que estarían conformando un nuevo cuadro de desarrollo social en la Costa Rica contemporánea.

EL PERFIL DE LOS HOGARES POBRES

EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Una vez identificados los hogares pobres, cabe preguntarse por las características sociodemográficas y sociolaborales que permiten reconocer las especificidades de su perfil básico. Cabe también cuestionarse si se observa, en términos empíricos, algún cambio en cuanto a los rasgos centrales que manifestaban las familias con insuficiencia de ingresos en la fase de desarrollo previo.

El Cuadro 18 presenta los principales hallazgos empíricos derivados del análisis bivariado. Es decir, compara las características promedio de los hogares pobres con las de las familias integradas a efectos de observar si existen diferencias estadísticas significativas entre ellos.

En cuanto a la relación de dependencia demográfica, es decir, la relación entre potenciales generadores de ingresos y población dependiente, se observa, también en 2003, que los hogares pobres tienen una carga demográfica más desfavorable que la de los hogares no pobres. Efectivamente, esta carga casi representa el doble para el primer grupo de familias en comparación con el segundo. Como lo muestra la columna de probabilidades (p), esta diferencia es estadísticamente significativa, incluso con un intervalo de confianza del 99%, e indica que en términos sustantivos las familias pobres y las no pobres sí se diferencian en cuanto a este rasgo. Los hogares pobres tienen menos recursos laborales en comparación con los no pobres.

Cuadro 18

Perfiles sociodemográficos de los hogares según el nivel de integración, julio de 2003

Características sociodemográficas	Hogares			p<*
	Pobres	No Pobres	Total	
Relación de dependencia demográfica (promedio)	1,16	0,61	0,75	.000
Sexo de la jefatura (%)				.000
Femenina	30,9	69,1	100	
Masculina	24,4	75,6	100	

Cuadro 18 [continuación]

Características sociodemográficas	Hogares			p<*
	Pobres	No Pobres	Total	
Nacionalidad de la jefatura (%)				.000
Costarricense**	25,1	74,9	100	
Mixto	33,6	66,4	100	
Nicaragüense	41,9	58,1	100	
Zona				.000
Rural	34,5	65,5	100	
Urbana	20,2	79,8	100	
Región				.000
Central	19,8	80,2	100	
Resto	36,9	63,1	100	
Escolaridad de la PEA (promedio de años)	5,50	9,43	8,40	.000

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EHPM.

* Prueba t para variables métricas y prueba chi-cuadrado para variables no métricas.

** Incluye hogares con jefes de otras nacionalidades.

La mayor carga demográfica es el resultado de la propia composición interna de los hogares. Así, el tamaño del hogar se incrementa conforme la pobreza se torna más aguda. Los hogares pobres extremos reportan un tamaño promedio de 4,6 miembros. Por su parte, entre las familias en pobreza relativa se produce un descenso pero no muy marcado, pasando a un promedio de 4,4 miembros. Finalmente, es en los hogares no pobres donde esta reducción es más notoria, pues en promedio reportan 1 miembro menos que las familias en indigencia: 3,6 integrantes por hogar.

Tal carga demográfica más negativa entre los hogares pobres no sólo es el resultado de un mayor número de miembros del hogar entre las familias pobres, sino principalmente de la concentración de esos miembros “de más” en edades “no laborales”. Sin embargo, el promedio de adultos mayores de 65 años no se diferencia según estrato de pobreza, situándose en los tres casos en 1,3. La diferencia principal en la carga demográfica se explicaría, principalmente, por la presencia de un mayor número de menores de 12 años en los hogares pobres. De hecho, el análisis de promedios evidencia esta tendencia. Así, el número de niños/as de 0 y 12 años se incrementa conforme lo hace el nivel de pobreza de los hogares. Los hogares no pobres tienen, en promedio, 0,71 personas menores de 12 años, mientras que los pobres reportan un promedio de 1,4 y entre las familias indigentes el promedio observado fue de 1,6, poco menos del doble de lo observado entre los hogares integrados.

Generalmente, este atributo sociodemográfico no evidencia cambios en el período en estudio. Los resultados de 1980 mostraron el mismo patrón, señalando que este es un rasgo estructural de la pobreza que no se ha alterado conforme la sociedad costarricense transitó hacia un nuevo modelo de acumulación. Esto, probablemente, es indicativo de la autonomía relativa del comportamiento de algunas variables demográficas, pero también del impacto diferencial de las políticas de control natal desarrolladas en el pasado. Entre los pobres, estas políticas parecen haber tenido menor efectividad. Diversas razones subyacen detrás de este patrón, tanto de orden cultural como económico. Más allá de ello, es evidente que, entre los hogares pobres, los frutos positivos de la modernización quedaron truncados, al menos si se juzga por su comportamiento reproductivo. El ajuste estructural no parece estar incidiendo sobre este particular, y no tendría por qué hacerlo en virtud de que este es un tema relegado en el contexto de prioridades del nuevo modelo de acumulación.

El segundo indicador empleado en este análisis para caracterizar el perfil sociodemográfico de los hogares pobres ha sido el sexo de la jefatura del hogar. El Cuadro 18 muestra con claridad que la jefatura femenina está más generalizada entre las familias pobres en comparación con las no pobres. Entre los pobres, poco menos de una tercera parte de los hogares reportaron en 2003 tener como responsable a una mujer, mientras que entre las familias no pobres este indicador baja a una cuarta parte. Este fenómeno es de gran relevancia. Parece también mostrar un rasgo estructural de la pobreza, pues la misma tendencia, aunque con diferentes proporciones, se observó para 1980.

La información para el año 2003 enseña que los hogares con jefatura femenina están creciendo a nivel nacional, como consecuencia de las transformaciones sociales que se experimentan en el ámbito de la constitución de la familia. Los divorcios se tornaron más comunes, tanto como las uniones libres y las separaciones de hecho. Sin embargo, no puede establecerse una relación mecánica entre estos procesos y la mayor presencia de hogares pobres con jefatura femenina, ya que los fenómenos citados son muy heterogéneos y afectan tanto a sectores populares como a sectores profesionales. La ecuación, como señalamos, no es lineal. Pues ni todos los hogares con jefatura femenina son pobres, ni todos los hogares pobres tienen como jefas a mujeres. Empero, algún indicador de feminización de la pobreza están reflejando los datos proporcionados.

El rasgo anterior también puede ser diferenciado por zona de residencia del hogar. En contextos urbanos, un 29% de las familias reportaron una jefatura femenina, en tanto que en zonas rurales este porcentaje se situó en 19,4%. Tal tendencia también fue observada en

1980, aunque los guarismos respectivos son diferentes. La diferencia indica que el fenómeno de la jefatura femenina es más usual entre los hogares urbanos. Probablemente, esto se deba a un menor apego de los núcleos familiares urbanos a valores de orden tradicional, lo cual incrementa la probabilidad de que los hogares situados en este tipo de contextos sean más propensos a la ruptura del modelo de familia nuclear clásico.

La tendencia general que muestra una mayor concentración de la jefatura femenina entre los hogares urbanos no reporta diferencia alguna si se toman sólo a las familias con insuficiencia de ingresos. Más bien los datos reportan una mayor distancia. Así, en las zonas urbanas, la proporción de familias con jefas mujeres fue de 26,8% en el caso de los hogares no pobres y de 37,8% en el caso de los pobres. En zonas rurales, por su parte, entre los hogares incluidos el porcentaje descendió a 17,5% en las familias no pobres, mientras que entre las pobres ascendió a un 23%. Las diferencias constatan la tendencia general. Mientras que en zonas urbanas más de dos terceras partes de los hogares de jefatura femenina son pobres, en zonas rurales esta proporción desciende a poco menos de una cuarta parte. En general, puede decirse que la jefatura femenina está más extendida en zonas urbanas que en zonas rurales. Este patrón se acentúa entre los hogares pobres de zonas urbanas.

La tendencia anterior muestra que en zonas urbanas el fenómeno de la jefatura femenina está más generalizado, en particular entre los hogares pobres; pero es posible suponer que en las zonas rurales los hogares pobres con jefatura femenina se encuentran en una posición de mayor desventaja social. Las razones son atribuibles a diferentes factores. Entre los más importantes se destaca la existencia de un mercado laboral que ofrece menores oportunidades y menores remuneraciones en zonas rurales, así como un menor acceso a los recursos fundamentales del medio rural (tierra) por parte de las mujeres.

Una forma de acercarse a esta idea es conocer las diferencias entre el ingreso per cápita reportado por estos hogares. Los datos muestran que, en efecto, los hogares pobres urbanos con jefatura femenina reportan un ingreso per cápita promedio de 17.484 colones mensuales, monto que desciende a 13.530 en el caso de sus semejantes de zonas rurales. Esto equivale a una diferencia del 22,6% en contra de las mujeres jefas de zona rural.

El dato anterior se complementa con el hecho de que las jefas pobres de zonas rurales tienen, en promedio, 1 año menos de educación formal que sus equivalentes urbanas; ubicándose el promedio en el primer caso en cuatro años y en el segundo en cinco años. En ambos contextos se constata un nivel educativo promedio muy bajo (primaria incompleta), lo cual repercute, sin duda, en una inserción

desventajosa en el mercado laboral y en remuneraciones laborales muy precarias.

En síntesis, los hogares pobres tienen una mayor presencia de jefatura femenina. Esta tendencia es más generalizada en zonas urbanas. Sin embargo, en zonas rurales, la posición social de estas jefas es de mayor desventaja. Su pobreza parece ser más severa. Perciben menos ingresos y el nivel educativo es más bajo.

Una tercera dimensión analítica presente en el Cuadro 18 contiene una valoración sobre la nacionalidad del jefe del hogar. La incorporación de este elemento requiere alguna precisión. Es ampliamente conocido que uno de los fenómenos más importantes acontecidos en la sociedad costarricense desde principios de la década del noventa ha sido el fortalecimiento de un flujo migratorio originado en Nicaragua. A partir de 1990, un número creciente de población nicaragüense tendió a asentarse en el territorio nacional. En ciertos casos, en busca de fuentes de empleo transitorio o estacional. En otros, en busca de empleos permanentes. Tres han sido los nichos de mercado en que se ha concentrado esta población: en las áreas rurales, en la economía agrícola campesina, especialmente en las grandes plantaciones de exportación (banano, frutas, plantas y flores, zafra) y en menor medida como fuerza de trabajo estacional en pequeñas unidades productivas intensivas en mano de obra en tiempos de cultivo (por ejemplo, el café); en áreas urbanas se han incorporado fundamentalmente en actividades que mostraban una escasez relativa de oferta de empleo, tales como la construcción y en menor medida la industria textil; y, finalmente, para las mujeres, el empleo doméstico ha constituido un sector de gran demanda de fuerza laboral nicaragüense (Morales y Castro, 1999).

Lo particular de este flujo migratorio es que no se trata de una tendencia de carácter coyuntural. Está asociado a la generación del excedente laboral en Nicaragua que, en el contexto de una profunda crisis económica de larga duración, intenta superar las tendencias de exclusión propiciando flujos migratorios constantes. La escasez relativa de oferta laboral en algunas actividades de la economía costarricense abre una oportunidad para la absorción de esta mano de obra. Como ha sido diagnosticado, las condiciones laborales en que es reclutada esta mano de obra son muy precarias (Morales y Castro, 1999).

De manera tal que un análisis de la pobreza de los hogares exige distinguir la posición de los hogares nicaragüenses en comparación con la de las familias costarricenses. Empero, la realidad es mucho más compleja. El asentamiento de población nicaragüense en Costa Rica ha dado lugar a la constitución de hogares mixtos, conformados como resultado de la unión, legal o de hecho, de población costarricense y

nicaragüense. Hogares que, para complicar más aún el análisis, tienen hijos que pueden mostrar una doble nacionalidad o una condición híbrida, ya que algunos de sus hijos pueden haber nacido en Nicaragua y otros, los de menor edad, en Costa Rica.

Al introducir estos elementos, se evidencia que, en términos de la nacionalidad de los cónyuges, la pobreza tiende a ser menor entre los hogares conformados por población costarricense, como era esperable. Entre este grupo, el más numeroso de los tres tipos identificados, una cuarta parte de los hogares muestra una integración social deficiente, es decir, insuficiencia de ingresos para la satisfacción de las necesidades. Si se toman en cuenta los hogares mixtos, se observa que el porcentaje de pobres se incrementa notoriamente, llegando a afectar a una tercera parte de estas unidades domésticas. Más crítica es la situación de los hogares nicaragüenses; en este caso, la proporción de pobres es la más alta. Cuatro de cada diez familias nicaragüenses viven en condiciones pauperizadas. Las diferencias estadísticas entre los promedios de estos tres grupos son significativas, lo cual indica que estamos frente a un fenómeno que afecta de manera diferenciada a los hogares según la nacionalidad de sus integrantes.

Los hogares conformados por integrantes nicaragüenses y los mixtos se muestran más propensos al fenómeno de la pauperización. Este fenómeno no debe sorprendernos. En realidad, la inserción laboral de la fuerza de trabajo de estos hogares tiene lugar en los estratos ocupacionales inferiores del mercado de trabajo. Asimismo, los estudios han mostrado que las condiciones de empleo y remuneración de esta fuerza laboral tienden a ser más deficientes que las reportadas entre las/os trabajadoras/es costarricenses. Su condición de población “indocumentada” ha contribuido, en parte, a dar lugar a estas diferencias.

La existencia de prácticas laborales que favorecen la contratación y remuneración al margen de la ley de la mano de obra nicaragüense, por parte de grupos importantes de patronos, ha rubricado este proceso. La población inmigrante, urgida por acceder a algún empleo, no ha tenido otra salida más que la de aceptar las condiciones laborales que de forma unilateral están fijando como “norma” los grupos empresariales que la contratan.

La existencia de un número importante y creciente de hogares conformados por población de origen nicaragüense parece complicar aún más el cuadro de la pobreza en el país. La construcción de procesos de integración y ampliación de la ciudadanía supone el desarrollo de políticas de integración de nuevos grupos sociales. En este caso, de un grupo de población inmigrante que ha llegado al país para asentarse en él. Las tendencias recientes muestran que este grupo, lejos de disminuir su presencia, tenderá a adquirir mayor preponderancia en el país. La

razón es que las causas que han dado origen a los flujos migratorios binacionales se acentuaron. Por un lado, la persistencia y profundización de la crisis económica en Nicaragua incrementan las presiones de migración de un contingente mayor de fuerza laboral en este país. Por otro lado, las nuevas modalidades de contratación laboral, regidas por principios de flexibilidad laboral creciente, exigen disponer de una fuerza laboral abundante, barata y maleable, cuya oferta y condiciones de trabajo respondan a los requerimientos de los circuitos globalizados de producción y no a las expectativas de inclusión social de la mano de obra contratada.

La cuarta dimensión presente en el análisis de perfiles de hogares está referida al nivel de calificación de los recursos laborales del hogar. Al igual que las otras, es una dimensión que se considera central, puesto que la mayor parte de los ingresos de los hogares proviene fundamentalmente de la integración de sus miembros en el mercado laboral. Esta integración laboral está condicionada, entre otros factores, por el nivel de calificación –formal y no formal– de los recursos laborales del hogar. Es de esperarse que, entonces, conforme es menor el nivel de calificación promedio de la fuerza laboral activa de un hogar, inferiores serán sus chances de generar recursos económicos para satisfacer cabalmente sus necesidades básicas. Además, se ha utilizado una variable de mayor nivel de complejidad, el nivel educativo promedio de la población activa del hogar, toda vez que de este conjunto de recursos humanos disponen las familias para atender sus necesidades. En ese sentido, se considera que el indicador refleja mejor la situación del hogar que una variable proxy referida exclusivamente al jefe/a del hogar.

La información empírica es consistente con la hipótesis de trabajo. Los hogares pobres presentan una fuerza laboral de menor nivel de calificación. En promedio, en estos hogares, las calificaciones de la mano de obra son muy bajas, ya que los años de educación formal acumulados son inferiores a los requeridos para obtener el certificado de acreditación de la enseñanza primaria. En sentido estricto, puede decirse que se trata de una fuerza laboral sin ningún nivel de calificación formal. Situación contraria es la reportada por las familias no pobres, aunque, como es de esperar, este es un grupo más heterogéneo. En este grupo, el nivel educativo promedio de la población económicamente activa del hogar supera en 4 años al promedio reportado por los hogares pobres, ubicándose en un nivel que indica un logro educativo mayor, pues en promedio acumulan 9,6 años de educación formal. Se podrá notar que las diferencias de promedios entre ambos grupos son altamente significativas. Estamos, nuevamente, frente a fenómenos que son imputables a la estructura social y no al azar o a errores de muestreo. Para decirlo en términos contemporáneos, las *estructuras de*

oportunidades no distribuyen de forma equitativa las chances de logros educativos. Los pobres tienen menos posibilidades en este terreno. Ello indica que políticas centradas sólo en ampliar la oferta educativa no corrigen el sesgo estructural que opera en contra de los hogares con carencias crónicas.

Si se tiene en cuenta la diferencia entre el ámbito rural y el urbano, dado el avance diferencial de los procesos de modernización educativa en ambos contextos, se observa que los hogares urbanos reportan un nivel educativo promedio mayor por parte de su población laboralmente activa. Mientras que entre estos hogares se acumulan, en promedio, 10 años de educación formal, entre las familias de zona rural el promedio observado desciende hasta 6,8 años. Como es de esperarse, la fuerza laboral de los hogares no pobres urbanos es la que muestra el mayor promedio de educación, con 10,8 años de educación formal. Mientras que sus iguales de zonas rurales muestran un rezago de 3 años, ya que su promedio general se ubica en 7,6 años de educación.

Los indicadores anteriores se deterioran cuando se toma como referencia a la fuerza laboral de los hogares pobres. En las zonas urbanas, el promedio desciende a 6,8 años de educación, es decir, esta fuerza laboral apenas concluye la primaria. La situación es aún más crítica en las zonas rurales ya que el promedio desciende a 5,1 años de educación formal. Entre este grupo de hogares, sus miembros laboralmente activos no logran ni tan siquiera concluir el primer ciclo básico del sistema educativo.

Los promedios educativos de los hogares pobres también muestran diferencias significativas si se compara la situación de los hogares indigentes con la de los hogares en pobreza relativa. En el primer caso, para zonas urbanas, se observa un promedio de 7,1 años de educación formal entre su fuerza laboral, mientras que entre los hogares indigentes el promedio disminuye un año. En zonas rurales, los promedios tienden a ser aún más bajos. Entre los hogares en pobreza relativa se observó un promedio de 5,4 años, mientras que en las familias de pobreza extrema este promedio cae hasta 4,7 años.

Se ha constatado que los integrantes laboralmente activos de los hogares pobres tienen menor nivel educativo formal y que conforme se pasa de contextos urbanos a rurales el promedio tiende a la baja. De igual manera, se advierte que, cuando la pobreza se torna más estructural, los hogares disponen de menos recursos para invertir en la formación educativa de sus integrantes. Pero también habría que decir que la sociedad en su conjunto no ha logrado realizar una inversión educativa que revierta estas tendencias generales. Es decir, no sólo se trata de que los hogares pobres tienen menos recursos para garantizar un mayor nivel educativo formal de sus integrantes; también las

diferencias estructurales muestran que la sociedad no ha logrado, por medio de sus políticas educativas, favorecer una mayor permanencia de los sectores más pobres en el sistema de enseñanza formal. La insuficiencia de recursos por parte de los hogares, sumada a los sesgos de la inversión pública en el sector educativo, explica el rezago educativo de las familias pobres.

Este rasgo estructural del perfil sociodemográfico de los hogares pobres no parece estar alterándose en el contexto de las reformas liberales iniciadas en la segunda mitad de la década del ochenta. Todo lo contrario, la evidencia empírica pone de manifiesto que estas reformas han acentuado las tendencias generales previamente existentes. Si además se agregaran las brechas de calidad educativa, las distancias entre los pobres y los no pobres tenderían a hacerse más profundas, indicando que en el futuro los logros en materia educativa tenderán a convertirse en un factor de creciente polarización social.

Los perfiles sociodemográficos de los hogares pobres se complementaron con la introducción de dos variables de orden territorial. La primera es la tradicional separación de los hogares según su lugar de residencia entre zona urbana y rural. La segunda está referida a un mayor nivel de desagregación socio-territorial, considerando las regiones de planificación. Si bien estas regiones son muy heterogéneas entre sí, y no necesariamente responden a la nueva estructura de la economía en gestación, permiten al menos tener una visión más amplia del fenómeno en estudio.

En materia de la división territorial clásica, se observa nuevamente que la incidencia de la pobreza es más aguda en las zonas rurales que en las urbanas. En las primeras, una tercera parte de familias muestra deficiencias en sus estándares de bienestar social. En tanto que, en las segundas, la quinta parte de los hogares está en condiciones de pauperización. Evidentemente, en las zonas rurales las distancias se incrementan (Cuadro 18).

Las diferencias entre el potencial para generar procesos de integración social por zona urbana y rural son más notorias si se considera también la distribución de los hogares pobres. En las zonas urbanas el 5,6% de los hogares son indigentes, mientras que en zonas rurales este porcentaje se duplica y afecta al 12,4% del total de familias. También, como era previsible, la pobreza relativa es más extensa en zonas rurales que en las urbanas. En las primeras, 2 de cada 10 hogares están pauperizados, mientras que en las segundas el indicador desciende para ubicarse en 1,4 familias por cada 10.

Esta información muestra, nuevamente, que las zonas rurales no sólo concentran más hogares pobres, sino también que en ellas la pobreza es más severa. Las tendencias de transformación productiva

y social desencadenadas en las últimas dos décadas no parecen estar alterando este patrón. Por el contrario, algunas tendencias de la reestructuración productiva han favorecido un impacto negativo en el agro, mediante el desestímulo de la producción de autoconsumo, esto es, las lógicas de reproducción campesina (Mora, 1993). La pobreza entre estos grupos sociales se vuelve más profunda debido a la falta de alternativas productivas y el empobrecimiento que supuso, por un lado, la eliminación de los subsidios de producción a estas familias y, por otro, el ingreso de competidores transnacionalizados que como resultado de la apertura comercial socavaron aún más la viabilidad de este tipo de unidad productiva⁵⁴.

Diferentes estudios reportaron que las unidades de producción campesina que no lograron insertarse en los nuevos circuitos de exportación agropecuaria han quedado en una condición de alto riesgo de empobrecimiento. Reportándose, entre estos grupos, procesos de movilidad social descendente que podrían estar configurando un sector social excluido de la dinámica del bienestar social y la integración productiva. Esta consideración se sustenta en dos ideas. Primero, la ausencia de políticas públicas efectivas y masivas orientadas a revertir los efectos negativos que el nuevo modelo de acumulación está teniendo en los sectores de economía campesina ligados al abastecimiento del mercado local. Segundo, la pérdida de funcionalidad económica de este grupo social, dado que en la actualidad es posible acceder a un menor precio en los mercados internacionales. En parte, la revolución tecnológica agrícola en curso, al alterar los rendimientos productivos y las calidades de las semillas y provocar su mayor adaptabilidad ecológica, también ha minado la base de competitividad de estos productores, toda vez que los nuevos conocimientos tecnológicos son monopolizados por las corporaciones agrícolas globalizadas.

Finalmente, si se introduce la otra variable socioterritorial en el análisis, se tiene nuevamente un cuadro que apunta hacia grados desiguales de integración social pero ahora de orden geográfico. Las mayores oportunidades de integración social se concentran en la Región Central del país, donde 2 de cada 10 hogares son pobres. En el resto del país, poco menos de 4 de cada 10 hogares muestran insuficiencia de ingresos para la atención de sus necesidades básicas. Como señalamos en el capítulo anterior, este es un rasgo estructural de la sociedad costarricense. La modernización nacional, en la fase del modelo desarrollista, reforzó y profundizó las diferencias de desarrollo social dentro del país. La concentración de los frutos de la modernización, tanto en términos

54 Téngase en cuenta, por ejemplo, la importación masiva de maíz proveniente del mercado estadounidense.

productivos como sociales, en la Región Central conllevó a una mayor aglomeración de población, recursos productivos y capacidad empresarial en esta zona. Como consecuencia, los mercados laborales son más diversos y presentan más opciones de integración en esta región.

Como era esperable, si se desagregan las otras regiones se observará que las capacidades de integración social también son diversas entre sí. Destacan dos regiones de planificación como las de menor capacidad de integración social: la Chorotega y la Brunca. En ambos casos, 4 de cada 10 hogares son pobres, siendo el indicador ligeramente más desfavorable en la Región Brunca. Como se observa en el Cuadro 18, el resto de las regiones muestran una gran brecha de pobreza con respecto a la Región Central. Así, en promedio, en todas estas regiones la incidencia de la pobreza oscila en alrededor de una tercera parte de los hogares. En materia de integración social, Costa Rica muestra una agrupación en 3 rangos. Por un lado, emerge la Región Central como el ámbito socio-territorial de menor incidencia de la pobreza. Por otro, se erigen las regiones Chorotega y Brunca como zonas de alta incidencia de la pobreza. En el medio se ubican el resto de regiones, con incidencias superiores a la Región Central pero inferiores a las de los casos extremos.

Un comentario aparte merece el caso de las regiones Chorotega y Brunca. En estos contextos, la pobreza extrema, es decir, hogares con ingresos insuficientes incluso para adquirir una canasta básica de alimentos, se sitúa casi en el mismo nivel que la pobreza total en zonas urbanas. En el primer caso, las familias indigentes representan el 16,4% y en el segundo, el 18% del total. Es preciso subrayar que estas regiones se caracterizan por la presencia de una gran cantidad de familias campesinas anteriormente ligadas a la producción de granos básicos. Estos grupos han visto sus posibilidades de integración social afectadas de manera adversa en las últimas dos décadas. Pese a que la primera región ha experimentado un proceso de modernización económica debido al desarrollo del turismo, una actividad ligada a los circuitos de la economía globalizada, esto no parece estar alterando positivamente el potencial integrador de estas regiones. Las familias campesinas pobres no parecen estar en una condición favorable para aprovechar el auge turístico existente en las regiones donde residen. El desarrollo rural sustentado en el turismo no parece ser, por ahora, una vía de integración social para este grupo de familias.

En definitiva, se repara que el perfil de los hogares pobres puede resumirse en los siguientes términos: tienen una mayor carga demográfica derivada de un mayor número de personas menores de 12 años; mayor presencia de mujeres que asumen el rol de jefatura del hogar; menor escolaridad formal de sus miembros laboralmente activos; re-

siden mayoritariamente en zonas rurales y en contextos regionales periféricos. El único rasgo nuevo, en el perfil de las familias pobres, lo constituye la creciente presencia de familias nicaragüenses o mixtas. Esto indica que estamos ante un cuadro estructural de pobreza que se ha agravado con la presencia de la población nicaragüense, que huye de la exclusión en su país y es presa de la pauperización estructural en la sociedad costarricense.

Si se toma 2003 como un punto de síntesis de las tendencias de cambio gestadas como consecuencia de las políticas de ajuste estructural, debería concluirse que el nuevo modelo de acumulación y el reordenamiento social que está produciendo han reforzado el patrón estructural de los hogares pobres. De esto puede desprenderse una primera conclusión general: el nuevo modelo de acumulación no resuelve las raíces estructurales de la pobreza en Costa Rica. Por el contrario, las dinámicas de modernización productiva ligadas a las demandas de la globalización refuerzan y profundizan las desigualdades estructurales en materia de integración social. Más aún, se insinúa la ruptura de la estructura social en sus estratos inferiores, dando lugar al desenlace de dinámicas que favorecen la exclusión social.

EL PERFIL LABORAL

El Cuadro 19 presenta la participación de la fuerza de trabajo de los hogares según la modalidad de inserción en los mercados laborales y por nivel de pobreza. La propuesta analítica sobre segmentación de los mercados laborales no es la misma que la considerada en el capítulo anterior. Las razones que conducen a variar los segmentos en el mercado laboral están asociadas con las nuevas formas de expresión de la heterogeneidad laboral en el marco del nuevo modelo de acumulación.

La heterogeneidad laboral en América Latina atraviesa un período de reconstitución como resultado de las transformaciones inducidas por la consolidación de las políticas de ajuste estructural y la creciente globalización de los procesos productivos (García y Oliveira, 2001; Mora Salas, 2000; Pérez Sáinz y Mora Salas, 2005). Comprender la naturaleza específica de este proceso exige trascender los recursos heurísticos empleados para analizar la heterogeneidad productiva y laboral en el período de auge de modernización productiva, industrialización “sustitutiva” y expansión del intervencionismo estatal, ya que dichas categorías analíticas no permiten captar las nuevas configuraciones laborales en curso.

En el actual modelo de acumulación, signado por la globalización, las categorías de empleo formal e informal han perdido capacidad analítica. Su contenido conceptual no permite dar cuenta de las transformaciones en curso en materia laboral. Ante la nueva realidad

del modelo de acumulación emergente, las categorías “clásicas” pierden poder analítico. En particular, las que postulan la separación clásica entre el sector formal y el informal. Ya sea que se adopte el enfoque del Programa Regional del Empleo para América Latina (PREALC) o el de los teóricos de la desregulación, el resultado es el mismo. En el caso de la propuesta formalizada por PREALC, la asociación entre tecnología y tamaño del establecimiento como criterios centrales para diferenciar el empleo formal del informal ya no se puede postular más. La nueva revolución tecnológica ha hecho que el desarrollo tecnológico no sea más el privilegio de las grandes firmas. Por su parte, los procesos de reestructuración productiva han dado lugar a prácticas de subcontratación de pequeñas empresas que no siempre muestran atrasos tecnológicos relevantes. Por otro lado, el enfoque regulacionista que diferencia el empleo formal del informal con base en el acatamiento de las normas de regulación social y laboral ha sido sobrepasado conforme las tendencias de reestructuración productiva y flexibilidad laboral se han extendido en la región. Así, el empleo formal ya no es sinónimo de ocupación regulada. Consecuentemente, la distinción entre lo formal y lo informal, según criterios de regulación, se torna difusa (Pérez Sáinz, 1996).

A lo anterior se suma la crisis del empleo formal. De singular importancia fue el declive del empleo público, en razón de la centralidad que el mismo tenía en materia de promoción de dinámicas laborales que sustentaban procesos de movilidad social e integración social sólida. Pero la crisis del empleo formal no sólo se manifiesta en la pérdida de importancia del empleo público sino también en la precarización de las relaciones salariales, como indicamos previamente.

Precarización laboral es un término que ha sido utilizado en la región de manera empírica y con poca precisión analítica. Mora Salas (2000) argumenta sobre la necesidad de conferirle un sentido conceptual a este término. Para ello propone tomar en cuenta tres dimensiones de este fenómeno: desregulación laboral; reestructuración productiva y flexibilidad laboral; y debilitamiento del actor sindical.

Siguiendo esta línea de razonamiento sugerimos que hay nuevos cortes analíticos que emergen debido a las transformaciones que están acaeciendo en los mercados de trabajo de la región. Uno de esos cambios se expresaría, en materia de relaciones laborales de tipo salarial, por la tendencia hacia la precarización de las relaciones salariales. El otro, por la reconfiguración del autoempleo, en un contexto signado por la apertura comercial y el deterioro del mercado interno. Finalmente, el desempleo parece tornarse un rasgo estructural del nuevo modelo de acumulación que, junto con la migración internacional de la fuerza de trabajo, emergen como dos de los mecanismos de ajuste

de los mercados laborales más extendidos en la región (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2005).

El resultado final de este conjunto de transformaciones sería una nueva segmentación de los mercados laborales en la que, analíticamente, habría que diferenciar el empleo asalariado según el nivel de precarización de las relaciones laborales. Asimismo, es imprescindible diferenciar entre el empleo asalariado y el autoempleo. En este último caso, la diferenciación hacia adentro estaría ligada a la capacidad de generación de excedentes productivos. Esta consideración lleva a distinguir tres tipos de autoempleo: el de reproducción simple, el intermedio y el dinámico. No se trata de una diferenciación *ad hoc*, sino de un planteamiento conceptual y metodológico que se sustenta en los hallazgos de los estudios centroamericanos sobre el comportamiento del autoempleo durante el período de ejecución de las políticas de ajuste estructural en el istmo (Pérez Sáinz y Menjívar, 1991; Briones, 1998; Trejos, 1999).

También debe captarse el excedente laboral excluido de los mercados de trabajo que asume la modalidad de desempleo abierto. En conjunto con el empleo precario (alto) y el autoempleo de subsistencia constituyen la forma de expresión del excedente laboral en el actual modelo de acumulación. Por su parte, el empleo asalariado no precario y el autoempleo dinámico representarían las dos modalidades de inserción laboral con potencial de integración social. La situación del empleo precario medio y bajo y la del autoempleo intermedio bien pueden favorecer procesos de integración social signados por el riesgo de pauperización, como analizaremos posteriormente.

Cuadro 19

Costa Rica. Perfil ocupacional de los hogares según nivel de integración, julio de 2003 (promedios)

Segmento ocupacional	Hogares			p<*
	Pobres	No pobres	Total	
Precario alto	0,29	0,24	0,25	.000
Precario medio	0,14	0,15	0,15	.277
Precario bajo	0,12	0,27	0,23	.000
No precario	0,07	0,55	0,43	.000
Autoempleo de subsistencia	0,18	0,09	0,11	.000
Autoempleo intermedio	0,23	0,23	0,23	.857
Autoempleo dinámico	0,04	0,12	0,10	.000
Desempleados	0,19	0,08	0,11	.000

Fuente: Elaboración propia con base en la EHPM.

* Prueba t-Student.

¿En qué ámbitos laborales insertan los hogares pobres su fuerza de trabajo y qué diferencias emergen con la estrategia adoptada por los hogares integrados? Busquemos una respuesta analizando primero el empleo asalariado, luego el autoempleo y finalmente el desempleo.

Al clasificar el empleo asalariado, promedio nacional, según el nivel de precariedad identificado, se observa, en primer lugar, que los hogares pobres tienden a insertar más fuerza laboral en las ocupaciones que muestran el mayor nivel de precariedad (precariedad alta). Se observa también que este promedio es superior al que reportan las familias no pobres en este mismo tipo de ocupación. Dos comentarios podrían realizarse al respecto. En el caso de los hogares pobres, con creces, es el tipo de inserción ocupacional más común, lo que no sorprende. Sin embargo, lo que sí es destacable es que entre las familias no pobres el promedio de fuerza laboral insertada en ocupaciones de alta precariedad también es alto, y constituye la tercera modalidad de inserción laboral, en orden de importancia decreciente para este tipo de hogares. En general, esto mostraría que la precarización laboral es un fenómeno en expansión. Su propagación tiende a afectar, de manera creciente, a estratos sociales que en el pasado habían accedido a empleos de calidad.

Lo acontecido en el empleo salarial, que reporta un nivel medio de precarización, no muestra diferencia. Los promedios para hogares pobres y hogares incluidos no marcan distancias. En el caso de las familias pobres, el promedio de fuerza laboral insertada en este tipo de ocupación representa la mitad del nivel reportado para el empleo precario alto. Esta relación es inferior en el caso de las familias no pobres. Sin embargo, los promedios de ambos grupos son muy semejantes. De ahí que la variable no discrimine según la condición de pobreza de los hogares.

Notoria y también significativa se torna la diferencia en cuanto a la integración de fuerza laboral de los hogares pobres en el empleo de precariedad baja en comparación con los hogares integrados. En este caso, el promedio de la fuerza laboral del segundo grupo representa poco más del doble que el observado para los hogares pauperizados. Ello indica, claramente, que conforme los empleos mejoran en su calidad, es decir, conforme los mismos atienden los niveles de regulación laboral existentes, su capacidad de generar dinámicas de inclusión social se incrementa. Sin embargo, al mismo tiempo, la mano de obra de los hogares pobres tiene mayores dificultades para acceder a este tipo de ocupaciones.

Este último planteo se ve corroborado, en el caso del empleo asalariado, cuando se observa la capacidad de los hogares pobres de movilizar su fuerza laboral hacia empleos que cumplen las principales normativas laborales (seguridad social, jornada laboral, estabilidad y remuneración). El promedio en este caso indica que este es un tipo de ocupación al cual la mano de obra de estos hogares casi no tiene acceso.

La tendencia es la opuesta en el caso de los hogares integrados. En ellos, el promedio reportado es el más alto observado en todas las modalidades de integración de fuerza laboral en el mercado de trabajo. Como es observable, estas diferencias son estadísticamente significativas. Pero lo más importante es que esta diferencia revela un hallazgo central. El mejor desempeño de los hogares no pobres en materia de inclusión social se asocia con un mayor acceso a empleos de calidad. Sucede lo opuesto con los hogares pobres.

Hasta aquí, lo dicho permite también extraer otra conclusión. Si se analizan con cuidado las tendencias, se podrá observar que, conforme se incrementa el nivel de precariedad del empleo asalariado, también lo hace el promedio de fuerza laboral de los hogares pobres en estos segmentos. Parece existir una asociación directa entre nivel de precariedad y pobreza. A mayor precariedad laboral de la fuerza de trabajo asalariada del hogar, mayor incidencia de la pobreza. La tendencia no es tan clara en el caso de los hogares no pobres. Sin embargo, sí existe la asociación inversa, pues estos logran movilizar una mayor proporción de fuerza laboral hacia los empleos de calidad.

Esta conclusión no se altera si se trata de mercados urbanos o rurales, como puede observarse en la información sintetizada en el Cuadro 20a. En el caso de los mercados urbanos las tendencias se tornan más claras, pues en ellos, para las familias integradas, la inserción más frecuente de su fuerza laboral en el mercado de trabajo acontece en el empleo asalariado no precario (el promedio es de 0,64, al tiempo que desciende su presencia en el empleo de alta precariedad: 0,19. En zonas rurales, hay mayor heterogeneidad. No se observan diferencias en cuanto a los promedios de fuerza laboral que los hogares integrados y los pauperizados insertan en el empleo altamente precario, ni en el de precariedad media. Es decir, este tipo de empleo parece estar generalizado en zonas rurales. Empero, sí hay diferencias en los otros tres sectores; los hogares pobres tienen menor capacidad de insertar fuerza laboral en los empleos conforme mejora la calidad del empleo.

Las tendencias anteriores permiten concluir que las inserciones laborales que propician dinámicas de integración social son aquellas que se distancian claramente de la precariedad laboral. En oposición a lo que los enfoques que abogan por la desregulación y flexibilización laboral suponen, se ha observado que los hogares que insertan su fuerza laboral de manera predominante en los empleos más precarios son los que están sumidos en condiciones de pobreza. Quizás la flexibilidad logre generar más empleos; pero estos no fomentan modelos de bienestar social amplios.

La otra modalidad de inserción está asociada con la dinámica del autoempleo, que incluye tanto el trabajo por cuenta propia no calificado, como el trabajo por cuenta propia de los profesionales y técnicos y

las inserciones de los patronos⁵⁵. Aquí es preciso destacar lo que acontece con el autoempleo de subsistencia y con el autoempleo dinámico, ya que los resultados del autoempleo intermedio no discriminan entre los hogares según condición de pobreza o de integración social.

A nivel del autoempleo de subsistencia, que en nuestro caso es un sector que se identificaría más claramente con la economía de la pobreza –pobres produciendo para pobres–, se logra observar una diferencia notoria. Este tipo de inserción laboral es más frecuente entre los hogares pauperizados. Efectivamente, entre los hogares no pobres la mano de obra involucrada en este tipo de actividades laborales es prácticamente inexistente (un promedio de 0,09 por hogar). Esta constatación empírica refuerza el criterio de que los hogares pobres tienden a evadir la exclusión laboral mediante el desarrollo de prácticas de autoempleo que no permiten superar la pobreza. Es evidente que aquí no hay ni integración laboral ni bienestar social. El autoempleo de subsistencia se retrata como lo que realmente es: una vía mediante la cual el excedente laboral intenta escapar a las tendencias de exclusión laboral en curso; es decir, un mero refugio que hace viable la subsistencia, es decir, la vida en condiciones de privación social.

En buena medida, las privaciones sociales que caracterizan a los hogares pobres se explican porque un importante volumen de su mano de obra queda atrapado en el segmento de economía de la pobreza. Para combatir las privaciones económicas, estas unidades domésticas tienden a movilizar más miembros al mercado laboral. No obstante, esta oferta laboral sólo encuentra integración en los empleos de alta precariedad, en el caso de que se “salaricen”, o bien, en el autoempleo de subsistencia.

Lo contrario acontece en el caso de los hogares cuya mano de obra logra tener acceso al autoempleo dinámico. El acceso a este tipo de ocupaciones es prácticamente inexistente entre los hogares pauperizados. Inversamente, entre los hogares no pobres, el promedio es considerablemente mayor. Empero, se debe resaltar que, incluso en el caso de los hogares no pobres, esta no constituye una modalidad de integración laboral frecuente. De hecho, es el ámbito del mercado de trabajo que menor capacidad de absorción laboral presenta, incluso para los hogares no pobres.

Contrariamente a lo mencionado, la asociación es evidente en este sentido. La mano de obra de las familias que no presentan deficiencias en la satisfacción de sus necesidades básicas logra tener mayor acceso al autoempleo dinámico. Aquí se agrupan fundamentalmente profesionales liberales, patronos de establecimientos dinámicos y pa-

55 Por definición, los patronos de establecimientos grandes (10 y más trabajadores) fueron ubicados en el autoempleo dinámico.

trones de grandes establecimientos. No obstante, se trata de una modalidad de articulación laboral con poca capacidad de arrastre, ya que el autoempleo dinámico apenas constituye una tercera parte del total del empleo no asalariado.

Finalmente, tenemos lo que acontece con los hogares cuando su fuerza laboral es excluida del mercado de trabajo. En este caso, se trata de la distribución del desempleo entre hogares pauperizados y hogares integrados. Los datos son claros, el desempleo suele ser un fenómeno que afecta en mayor proporción a las unidades domésticas empobrecidas, en tanto que, entre las que han alcanzado un nivel que les permite ubicarse por encima de la línea de pobreza, este fenómeno es muy poco frecuente.

La mayor preponderancia de la exclusión laboral (desempleo) entre los hogares pobres indica, probablemente, una relación causal. Tales hogares muestran mayores dificultades para acceder a un nivel de integración social satisfactorio, en tanto que sus miembros laboralmente activos encuentran mayores dificultades para participar en el mercado de trabajo. Cuando lo hacen, su modalidad de inserción predominante ocurre en condiciones salariales altamente precarias o en condiciones de autoempleo de subsistencia. Es decir, siguen patrones de integración laboral que no propician dinámicas de integración social.

Puede concluirse que los hogares pobres tienden a concentrar su fuerza de trabajo en las actividades de menor productividad, mayor desregulación laboral y escaso, si no nulo, potencial de acumulación. Es poco probable que se logren generar procesos de integración social si estos rasgos estructurales no son alterados. La dificultad deviene en que el nuevo modelo de acumulación estaría tornando afuncionales ciertos segmentos y grupos de trabajadores (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2005). También está sometiendo a otros sectores de la fuerza laboral a condiciones laborales muy adversas como consecuencia de los procesos de precarización del empleo. De esta manera, se recrean condiciones para la estructuración de mercados laborales cuya dinámica reproduce la pobreza al tiempo que se consolida y expande el nuevo modelo de acumulación.

LOS DETERMINANTES DE LA POBREZA Y EL RIESGO DE PAUPERIZACIÓN

Es nuestro interés no sólo tener un perfil bivariado de los rasgos más sobresalientes de las familias pobres en relación con las que han alcanzado un nivel de inclusión social que les permite satisfacer sus necesidades básicas. También es central para el objetivo básico de este estudio determinar los factores de riesgo que afectan el nivel de integración social y pueden significar pérdidas significativas en las condiciones de vida de un importante contingente de hogares que han logrado superar la pobreza.

Para ello es necesario estimar un modelo de regresión logística múltiple, que pueda identificar tanto los factores de riesgo –es decir, los que incrementan la probabilidad de que un hogar se pauperice– como los factores de inclusión, aquellos que favorecen procesos de integración social consolidada. Los resultados de estos ejercicios se sintetizan en los cuadros 20a y 20b.

Cuadro 20a

Regresión logística de probabilidad de pobreza a partir de predictores seleccionados, julio de 2003

Variable	Coefficiente (B)	Desviación estándar	Significancia
Jefatura femenina	0,175	0,065	.008
Promedio años escolaridad PEA	-0,176	0,009	.000
Nacionalidad de la jefatura			.000
Costarricense	-0,646	0,146	.000
Mixta	-0,395	0,179	.028
Región			.000
Central	-0,677	0,073	.000
Pacífico Central	-0,297	0,123	.016
Huetar Atlántica	-0,623	0,126	.000
Huetar Norte	-0,701	0,101	.000
Precario alto	-0,499	0,056	.000
Precario medio	-0,743	0,075	.000
Precario bajo	-1,319	0,079	.000
No precario	-2,223	0,093	.000
Autoempleo intermedio	-0,550	0,061	.000
Autoempleo dinámico	-1,566	0,119	.000
Desempleados	0,733	0,075	.000
No clasificados	-1,301	0,300	.000
Hogares sin trabajadores	-0,808	0,098	.000
Constantes	2,574	0,173	.000
-2LL	7980.548	chi-cuadrado del modelo	3162.533
Cox y Snell R-cuadrado	0,238		
Nagelkerke R-cuadrado	0,407	Prueba F (17 gl)	.000

Fuente: Elaboración propia con base en EHPM.

Nota: La variable autoempleo de subsistencia no resultó significativa. Su coeficiente fue de -0.114, Wald fue de 2.453 y la significancia estadística fue de .117.

Cuadro 20b

Costa Rica. Cuadro de clasificación. Eficiencia predictiva del modelo, julio de 2003

Observados	Predichos		Porcentaje correcto
	0	1	
0	5,476	1,705	76,3
1	604	1,927	76,1
Total (%)			76,2

Fuente: Elaboración propia con base en EHPM.

Se trata de modelos con una buena bondad de ajuste. El modelo teórico, traducido en términos empíricos en el análisis de regresión, logra dar cuenta de la reducción de errores en un porcentaje que oscila entre 24% y 41%, lo cual, como hemos explicado anteriormente, es elevado, si se considera que se trata de una base de datos donde la intervianza es elevada⁵⁶. Asimismo, se obtuvo una prueba estadística significativa del modelo, que indica que el análisis de regresión puede proceder, pues el modelo tiene capacidad predictiva. Igualmente relevante para nuestro propósito es la observación de este indicador, tal cual se expresa en la tabla de clasificación de valores observados y predichos (Cuadro 20b). El porcentaje global de aciertos del modelo es elevado, pues equivale a más de tres cuartas partes de los casos en estudio. Más importante aún es que el modelo es totalmente equilibrado, es decir, tiene el mismo poder predictivo para las unidades domésticas pobres que para las no pobres. Estos resultados en conjunto muestran que se trata de un buen modelo de regresión, desde el punto de vista de las estadísticas de bondad de ajuste.

Los resultados sustantivos derivan de la lectura del Cuadro 20a. Un análisis detallado de las variables independientes del modelo muestra que se trata de las mismas variables que se han empleado para construir los perfiles bivariados que comentamos en la sección anterior. La diferencia es que con el análisis multivariado evitamos correlaciones espurias. Igualmente, podemos estimar la contribución marginal de cada variable independiente a la estimación de la probabilidad de pobreza de los hogares. También se puede determinar el sentido que tiene cada regresor, es decir, se pueden definir las variables que aumentan y las que disminuyen la probabilidad de que un hogar se pauperice. Finalmente, permiten estimar para cada hogar una probabilidad de pobreza que posteriormente será empleada para diferenciar las familias no pobres en dos grupos: las que tienen integración social frágil y las que tienen integración social consolidada.

⁵⁶ Sobre el particular puede consultarse Menard (2002), Borooah (2002) y Greene (2003).

En términos sustantivos, los hogares con jefatura femenina muestran una mayor propensión hacia el empobrecimiento en comparación con la condición de jefatura masculina. Más aún, los datos muestran que la razón de probabilidad de pobreza se incrementa en un 18,7% cuando la jefatura del hogar la asume una mujer, manteniendo constante el resto de factores que condicionan esta probabilidad.

Tales resultados confirman el hallazgo observado mediante el análisis bivariado resaltando que no se trata de una correlación espuria. Lo importante es reconocer que en las últimas décadas las familias lideradas por mujeres se han incrementado. La aceleración de esta tendencia podría estar conduciendo a que el fenómeno de riesgo de empobrecimiento de los sectores medios se incremente. Ello ocurriría cuando estos hogares quedan liderados por mujeres que se insertan en los sectores altamente feminizados y donde se aglomera el excedente de fuerza laboral.

Asimismo, se ha logrado determinar que entre las familias cuya jefatura es femenina, con independencia de su condición de pobreza, el promedio de desempleados es mayor; la cantidad de fuerza laboral disponible es menor (PEA del hogar), y mayor es también el promedio de hogares que no reportan tener trabajadores/as; siendo las diferencias entre estos promedios, en los tres casos, estadísticamente significativas.

El análisis estadístico muestra también que los hogares de jefatura femenina tienen una relación de dependencia económica más desfavorable, como consecuencia, claro está, de disponer de menos fuerza laboral ocupada. Sin embargo, se evidencia que el nivel educativo promedio de las jefas mujeres es mayor que el de los jefes. También revela que en los hogares de jefatura femenina el promedio de educación formal de la población activa del hogar es ligeramente superior. Estas diferencias son todas estadísticamente significativas y, además, se mantienen con independencia del nivel de integración social del hogar.

Lo anterior confirma la existencia de estructuras sociales que dan lugar a un acceso diferenciado a las condiciones de bienestar de los hogares según estén liderados por hombres o por mujeres. El modelo de regresión muestra con claridad que las posibilidades de integración se reducen para hogares que teniendo las mismas características (controladas por el modelo) sólo difieren en su condición de jefatura. De forma tal que si se mantienen constantes las actuales estructuras sociales y productivas, entonces, un incremento de las jefaturas femeninas entre los hogares no pobres se podría traducir también en una mayor probabilidad de pauperización para las familias que muestren este rasgo. Es importante llamar la atención sobre esto, pues no se trata de una tendencia hipotética, sino más bien de un proceso que se ha tornado cada vez más frecuente. La expansión de este fenómeno se puede di-

mensionar si se toma en cuenta que, en 1980, el promedio nacional de familias con jefatura femenina era de un 17,4%, mientras que en 2003 el nivel ascendió a un 25,5%.

La segunda variable introducida en el análisis de regresión, que resultó ser estadísticamente significativa, está referida al nivel de educación formal promedio de la población laboralmente activa del hogar. Se trata de una variable que busca captar el logro educativo formal de todos los integrantes laboralmente activos del hogar. La razón de fondo deriva del hecho de que en un número creciente de familias existe más de un perceptor de ingresos. En consecuencia, el nivel de bienestar del hogar está determinado por la inserción de todos ellos en el mercado laboral.

En este caso, el resultado indica que al incrementarse el nivel educativo formal de la mano de obra del hogar se incrementa su probabilidad de integración social, o, lo que es lo mismo, las posibilidades de empobrecimiento se ven reducidas, ello manteniendo constante el resto de características de la unidad doméstica. El análisis de los momios es difícil, por cuanto se trata de promedios de educación formal dentro de la PEA del hogar. Estos indicarían que, al cambiar en una unidad el promedio de educación formal, es decir, cuando al menos uno de los integrantes de la fuerza laboral de la familia logra incrementar su nivel educativo formal en un año, entonces, la razón de probabilidad de integración social se incrementa en un 16% en el conjunto del hogar.

Lo anterior indicaría que familias que logran invertir más en la formación de sus integrantes tienen mayores posibilidades de disminuir los riesgos de empobrecimiento a los que el cambio en el modelo de desarrollo está dando lugar. Sin embargo, es necesario tener cuidado con la lectura mecánica asociada con variables educativas. Primero, el modelo analizado no considera el impacto de otro tipo de aprendizaje, el no formal. Es decir, puede ocurrir que el impacto de la educación formal sobre las probabilidades de integración social de los hogares esté sobrestimado. La ausencia de información sobre el particular no permite someter a prueba esta hipótesis, la cual probablemente conduciría a disminuir el peso de la enseñanza formal. En segundo lugar, también debe tenerse presente que los mercados de trabajo son credencialistas. Esto es, los saltos en remuneración y oportunidades de cambio de empleo, de menor a mayor calificación, no acontecen sólo por agregar un año de educación formal más. Usualmente, ello tiene lugar cuando los sujetos adquieren una nueva credencial educativa, para lo cual deben culminar ciclos educativos completos (primario, secundario, universitario). De ahí las precauciones que deben tenerse con la lectura de resultados de esta variable.

Pese a estas salvedades, los resultados del modelo de regresión son consistentes con los hallazgos observados mediante el análisis bi-

variado comentado en la sección anterior. Allí se pudo constatar que el nivel educativo de la fuerza laboral de hogares pobres es, en promedio, menor que el observado entre hogares integrados. Además, estos niveles varían de forma negativa conforme la pobreza se torna más severa.

La conclusión es también consistente. Las familias que han logrado un nivel educativo promedio mayor entre su fuerza laboral están mejor preparadas para resistir procesos de empobrecimiento. Probablemente, esto se deba a que un mayor nivel educativo también les permite acceder a empleos de mayor calidad.

El tercer rasgo sociodemográfico presente en el análisis de regresión está referido a una tipología de hogares. Se trata de una variable pluricotómica donde el grupo de comparación son los hogares de cónyuges nicaragüenses⁵⁷. El análisis bivariado sugirió que es este tipo de hogares el que presenta una mayor propensión a la pobreza. De igual manera, indicaba que esa propensión disminuía si el hogar estaba conformado por una pareja de nacionalidad mixta, aunque para estos hogares las chances de verse afectados por procesos de empobrecimiento eran siempre mayores que en el caso de parejas costarricenses.

El objetivo de esta variable es captar la existencia de procesos de inclusión social diferenciada según nacionalidad. Es decir, evidenciar la manifestación de estructuras y prácticas sociales que propician una inserción social más desfavorable para las familias nicaragüenses o mixtas. La variable mide la existencia de prácticas de discriminación social que dificultan y/u obstruyen los procesos de integración social y el disfrute de derechos de ciudadanía social de la población nicaragüense.

Los resultados estadísticos nuevamente confirman la existencia de estructuras y prácticas de discriminación social según la nacionalidad del hogar. Los hogares nicaragüenses son los que tienen mayor probabilidad de ser pobres. Las probabilidades de pobreza disminuyen si en el hogar al menos uno de los miembros de la pareja es costarricense. Empero, es entre los hogares costarricenses donde las probabilidades son incluso menores. Siendo, en todos los casos, las diferencias significativas en términos estadísticos y la significancia de la prueba mayor cuando la comparación se realiza entre familias nicaragüenses y costarricenses.

Los resultados no son sorprendentes. El conocimiento acumulado en estudios de migración en el país muestra que la población nicaragüense tiene niveles educativos menores a los promedios nacionales. Adicionalmente, los integrantes de estas familias suelen incorporarse en

57 En el caso de familias donde no está presente el o la cónyuge, el análisis toma en cuenta la nacionalidad de la persona que detenta la jefatura del hogar para clasificarlo. Sin embargo, aquí sólo se tienen dos posibilidades: un hogar de nicaragüenses o un hogar de costarricenses. La opción intermedia no es posible estimarla.

sectores del mercado laboral de baja capacidad remunerativa (empleo doméstico), alta rotación e inestabilidad laboral (asalariados agrícolas y del sector construcción). También es conocido que el flujo inmigratorio ha sido alentado por la existencia de prácticas laborales que propician la afluencia de migrantes con un doble propósito: disponer de una mayor oferta laboral, con lo cual las condiciones de empleo pueden ser fijadas hacia la baja, en particular las remuneraciones; pero también el flujo inmigratorio es alentado por la agudización de los procesos de exclusión social en el país de origen. Esto condiciona las inserciones laborales del inmigrante, cuyo objetivo principal es, durante una primera fase, asegurarse un puesto de trabajo que le permita cubrir sus necesidades primarias más elementales. Esto explica por qué este tipo de hogares tiene la mayor probabilidad de encontrarse, o caer, en los estratos de hogares pobres.

El análisis de las razones de probabilidad indica que, en el caso de los hogares mixtos, la probabilidad de pobreza disminuye en un 52,4% en comparación con familias donde los dos cónyuges son nicaragüenses. Mientras que la reducción es aún mayor para los hogares costarricenses; en este caso, la probabilidad de integración se incrementa en un 66,4%.

Las diferencias con respecto al grupo de hogares nicaragüenses son muy notorias como para no percatarse de que la sociedad costarricense está gestando dinámicas sociales que estimulan la reproducción de la pobreza entre los hogares inmigrantes de origen nicaragüense. Pareciera, por tanto, que la fractura social no sólo tiene lugar por el lado del riesgo del empobrecimiento de los sectores medios, sino también por la existencia de un sistema de integración social dual. En este sistema se discrimina a la población nicaragüense y se la somete a condiciones de mayor pauperización. La paradoja es que, en su intento por abatir la exclusión, grupos crecientes de población nicaragüense están migrando hacia Costa Rica. Aquí logran superar la exclusión del lugar de origen, pero quedan atrapados en un contexto que los condena a condiciones de vida marcadas por la privación social.

En términos territoriales, el punto de comparación son las regiones de menor desarrollo social del país, es decir, las que concentran mayor cantidad de hogares pobres: la Región Brunca y la Región Chorotega. La agrupación de estas dos regiones en un solo grupo se debe a que no se encontraron diferencias significativas en sus promedios cuando ambas fueron introducidas en el modelo de regresión de forma separada.

En tanto que la comparación se hace con las regiones de menor desarrollo social, se esperaba que hogares con los mismos perfiles sociodemográficos y laborales vieran disminuidas sus probabilidades de pauperización al cambiar la región de residencia. Esto es lo que, en efec-

to, sucedió, tal y como se muestra en el Cuadro 20a. Los datos pueden ilustrar más esta idea. Así, para los hogares radicados en la Región Central la razón de probabilidad de ser pobre se reduce en la mitad (49%) en comparación con aquellos radicados en la Región Chorotega y Brunca. En la Región Pacífico Central, la reducción es menor: disminuye la razón de probabilidad de ser pobre en una cuarta parte (25%) con respecto al grupo de comparación. En la Región Huetar Atlántica, la reducción observada en los momios de probabilidad de pauperización cayó en un 46,3%. Mientras que en la Región Huetar Norte, la reducción reportada se situó también en un 50% con respecto al grupo de referencia.

De igual manera, el análisis de las razones de probabilidad (momios) indica que, conforme el nivel de desarrollo social y económico de una región es mayor, menor es la probabilidad de pauperización de las familias radicadas en dicho contexto en comparación con las dos regiones de menor desarrollo (grupo de referencia).

Detrás de los efectos diferenciales de las regiones sobre la probabilidad de pauperización de las familias, se encuentran complejas estructuras socioeconómicas y especificidades adquiridas en dichos contextos por el desarrollo social. Lo que el modelo de regresión muestra con toda claridad es que las probabilidades de empobrecimiento de los grupos medios no son uniformes en el territorio nacional. Las probabilidades de pobreza se incrementan de manera sustantiva en aquellas regiones donde la misma está más extendida, el excedente laboral es más numeroso y se constata una gran presencia de autoempleo regido por lógicas de reproducción simple y por relaciones salariales de alta precariedad. Sin embargo, es preciso recordar que Costa Rica muestra una alta concentración poblacional en su Región Central. Dos terceras partes de su población radican en esta región. Tradicionalmente, este fue el núcleo central de concentración de los estratos medios, de ahí que, aunque el riesgo de empobrecimiento sea menor en esta región, muy probablemente en su interior se concentrará un núcleo numeroso de hogares con integración social frágil.

El segundo bloque de variables que componen el modelo de regresión busca captar el impacto que tiene la inserción de los miembros del hogar en diferentes sectores del mercado laboral. Es decir, intenta determinar dónde se localizan las ocupaciones con potencial para reducir la pobreza y cuáles la incrementan.

Iniciemos el análisis con las diferentes modalidades de participación asalariada en el mercado laboral; puestos de alta, media y baja precariedad, así como empleos no precarios. En los cuatro casos, inserciones en este tipo de empleos tienden a reducir la probabilidad de que un hogar sea pobre. Esto podría parecer contradictorio con los resultados del análisis bivariado. Sin embargo, no es así. La lectura

debe hacerse en términos de “costos de oportunidad”. Ya que la situación de mayor pobreza tiene lugar cuando los hogares no reportan tener ningún miembro ocupado, la inserción de algunos de sus integrantes en cualquier tipo de actividad laboral tiende a reducir la probabilidad de pobreza. Lo crucial es, en este caso, analizar la capacidad diferenciada de las distintas inserciones para generar tal efecto. Es decir, jerarquizar las inserciones según su potencial de integración social. Para ello, es necesario observar lo que acontece con los momios de la probabilidad de pauperización para cada tipo de inserción laboral asalariada.

Se observa con claridad que las razones de probabilidad se jerarquizan en el orden esperado. La tendencia emergente es evidente: a mayor precariedad laboral, menor capacidad tiene el empleo para fomentar procesos de inclusión social. Es decir, los sectores caracterizados por una alta precariedad laboral muestran una menor probabilidad de reducción de la pobreza. Nuevamente, los datos ilustran con precisión la jerarquía. En el caso de un hogar que moviliza su fuerza laboral hacia el sector de empleos de alta precariedad, es decir, allí donde los mercados de trabajo alcanzan el mayor nivel de flexibilidad y desregulación, las chances de un hogar de reducir la pobreza se sitúan en alrededor de un 40%⁵⁸. Sin embargo, si el mismo hogar lograra insertar su fuerza laboral en un sector de precariedad laboral media, sus chances de caer en la pobreza se reducirían en un 53,6%. Pero es en el empleo asalariado de baja precariedad, y especialmente en el no precario, donde estas chances alcanzan sus mayores reducciones. En el primer caso, se reducirían en un 74,6% mientras que en el segundo, en un 89,5%.

La información es suficientemente palmaria para mostrar que el potencial de los mercados laborales para fomentar dinámicas de integración social está asociado con el nivel de regulación y flexibilización. La tendencia no permite ambigüedades. A mayor regulación laboral, mayor probabilidad de integración social. Esta tendencia fue también constatada por Pérez Sáinz y Mora Salas (2004), quienes muestran que los hogares pobres extremos ven incrementadas sus probabilidades de ascender al grupo de pobres relativos al abatir el desempleo entre sus integrantes; incluso, aunque accedan a empleos de alta precariedad. De igual manera, los pobres relativos podrían superar esta condición si sus integrantes se movieran hacia empleos de precariedad baja y media. Sin embargo, y esto es lo central, los autores llaman la atención sobre el hecho de que, para superar la zona de riesgo de pauperización, la única alternativa de los hogares es incorporar su mano de obra en empleos asalariados no precarios.

58 Recuérdese que la comparación es con hogares que no lograron integrar a ninguno de sus miembros en el mercado laboral.

En cuanto a las dinámicas asociadas con las modalidades de autoempleo, es decir, con los segmentos que surgen a partir de la movilización de recursos de la propia fuerza laboral para generar opciones ocupacionales, también se obtienen resultados de gran trascendencia.

En primer lugar, cabe destacar que la inserción de fuerza laboral por parte de las unidades domésticas en el autoempleo de subsistencia no genera efecto alguno sobre la probabilidad de reducción de la pobreza. Esto parecería indicar un comportamiento no esperado de esta variable, pues el análisis de perfiles mostró que los hogares pobres movilizan más fuerza laboral hacia este tipo de ocupaciones en comparación con las unidades domésticas integradas. Pero también es posible una lectura alternativa. En este caso, se destacaría que el autoempleo de subsistencia es tan básico que la incorporación de miembros del hogar en este sector no altera su condición social. Tal tipo de inserción laboral, probablemente, evita un mayor deterioro social, pero no se traduce en logros en materia de bienestar social. De ahí que las políticas públicas centradas en el fomento de este tipo de ocupaciones no puedan lograr abatir los índices de pobreza.

Las otras dos modalidades de participación en el autoempleo tienen tanto el signo y la significación estadística esperada como el orden jerárquico hipotetizado. Así, cuando un hogar logra insertar un miembro más de su fuerza laboral en el autoempleo intermedio, su probabilidad de pobreza se reduce en un 42%. En tanto que, si la inserción tiene lugar en el autoempleo dinámico, esta reducción llega a ser de un 79%.

La información muestra que la inserción de otros miembros del hogar en el autoempleo de subsistencia no reduce la probabilidad de que el hogar mejore su condición de inserción o evite una mayor pauperización. En tanto que, cuando la movilización de un miembro adicional del hogar se dirige hacia los sectores con mayor capacidad de acumulación y dinamismo, las ganancias en materia de inclusión social se elevan, siendo considerablemente más significativas cuando la inserción tiene lugar en el autoempleo dinámico.

Una vez más, llamamos la atención sobre el estudio de Pérez Sáinz y Mora Salas (2004), el cual indica que, entre los hogares de zonas urbanas y rurales, el desempleo también puede superarse por la vía del autoempleo. Los autores muestran que la probabilidad de saltar del desempleo a una inserción de autoempleo intermedio o dinámico no es viable en el actual mercado laboral costarricense. La ruta factible es la superación del desempleo por medio del autoempleo de subsistencia. Consecuentemente, las familias, pese a todos los esfuerzos que realizan, no logran crear condiciones favorables para la superación de la pobreza. En el mejor de los casos, logran detener tendencias de deterioro

social, pero rara vez les alcanza para revertir procesos de pauperización social en curso.

Vale la pena resaltar los hallazgos señalados. La incorporación de fuerza laboral en los mercados laborales tiene efectos positivos sobre la probabilidad de integración social de los hogares, particularmente cuando aquella tiene lugar en el empleo asalariado no precario y en el autoempleo dinámico. Bajo estas inserciones, los hogares no sólo logran reducciones significativas en su probabilidad de pauperización, sino que también pueden moverse hasta un nivel de integración social que les permite tener una posición social más consolidada. Sólo cuando se alcanza este nivel, las inseguridades generadas por la operación de una economía en franco proceso de liberalización y globalización logran atenuarse.

Del Cuadro 20a quedan aún pendientes de examinar dos variables de importancia analítica. La primera está asociada a un fenómeno empírico que se ha podido dimensionar entre algunos hogares: la existencia de unidades domésticas que no reportan ningún miembro laboralmente activo. Presumiblemente, se trataría de hogares de pensionados o rentistas. En ambos casos se observa que esta no es una variable que afecte las chances de integración social de los hogares en un sentido negativo. Contrariamente, las familias que tienen esta característica muestran una menor probabilidad de pauperización en comparación con las que sí tienen fuerza laboral activa. Esto parece corroborar nuestra hipótesis de que se trata de hogares que perciben ingresos como consecuencia de rentas de capital u otro tipo de remuneraciones (alquiler de propiedades, venta de activos de gran valor, etcétera).

Finalmente, hemos sostenido que en los mercados laborales la fuerza de trabajo puede quedar en condición de exclusión. Cuando ello ocurre el excedente de trabajo asume la modalidad de desempleo abierto. El análisis de regresión revela que es precisamente esta condición la que más afecta las probabilidades de pauperización de los hogares no pobres. Así, un hogar en el cual se suma uno de sus integrantes activos a la condición de paro ve incrementarse su razón de probabilidad de pobreza en un 157%. La gran importancia que esta variable tiene sobre la estimación de la probabilidad de pobreza deriva del método empleado, el cual es dependiente de la capacidad de generación de ingresos por parte del hogar. El paro de alguno de los integrantes del hogar implica una alta probabilidad de pauperización. Esto es particularmente cierto cuando los hogares no disponen de otros activos familiares para preservar sus condiciones de vida.

La constatación anterior es de particular importancia. Recuerda que las familias quedan expuestas a una condición de riesgo de pauperización muy severa en contextos donde la flexibilidad laboral se

torna extrema. En síntesis, en contextos donde la estabilidad laboral se torna difusa, y el desempleo deviene un rasgo estructural del modelo de acumulación, los hogares no pobres ven amenazada la satisfacción de sus necesidades básicas. En tanto que los hogares pobres podrían verse inmersos en dinámicas sociales que favorecen la exclusión social (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2006).

El análisis efectuado nos permite identificar los factores que inciden sobre la probabilidad de que un hogar integrado se empobrezca. Sin embargo, no hemos aún determinado la dimensión del grupo de hogares que conforman el estrato de integración en riesgo de pauperización. Es precisamente esto lo que se aborda en la sección siguiente.

EL RIESGO DE EMPOBRECIMIENTO: LA FRACTURA SOCIAL DE LOS SECTORES MEDIOS

Las tendencias de reconstitución de la estructura social costarricense muestran que uno de los cambios sociales más relevantes se asocia con la reconstitución de los estratos medios. Se trata del deterioro de la posición social que en el modelo de desarrollo previo ocuparon los sectores medios, en particular el grupo conformado al calor de la expansión del empleo público. Las políticas de cambio estructural parecen haber desencadenado procesos de movilidad social descendente entre estos grupos. Concomitantemente, la movilidad ascendente se ha tornado más selectiva y restringida. Los mecanismos que en el pasado garantizaron este tipo de movilidad social, básicamente el empleo en el sector público y la educación pública a nivel superior, habrían perdido el dinamismo que tuvieron en el modelo desarrollista y estarían siendo sometidos a tendencias de deterioro, estancamiento y/o creciente elitización (Villasuso, 1990; Castro, 1995). En este contexto, el nivel de integración de un importante contingente de sectores medios se ha tornado frágil. El grupo más endeble muestra una alta propensión a caer, coyuntural pero reiteradamente, por debajo de los umbrales de pobreza (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2001).

El nuevo modelo de acumulación mostraría limitaciones para fomentar dinámicas amplias de integración social; al mismo tiempo, emerge evidencia empírica en favor de la tesis de movilidad social, descendente y selectiva, que está haciendo mella entre los sectores medios. Esto último no es de extrañar si se tiene en cuenta, como lo han sostenido diversos estudios, que en Costa Rica las políticas de ajuste estructural han tendido a recargar su peso en los sectores medios. Esto como parte de una estrategia orientada a evitar el empobrecimiento extremo de los sectores populares, entre otras razones, para evitar la agudización de conflictos sociales que dificultarían el avance de las reformas estructurales (Valverde et al., 1993a; Trejos, 1997; Castro, 1995).

Más recientemente, Pérez Sáinz et al. (2004), en un estudio sobre cambios en la estructura social en los países centroamericanos, determinaron que en Costa Rica parece estar teniendo lugar una especie de polarización de los sectores medios. El estrato superior se estaría elitizando mediante el acceso a nuevas posiciones sociales en función de su inserción privilegiada en el nuevo modelo de acumulación (profesionales ligados al campo de la tecnología de punta que se insertan en posiciones superiores en empresas transnacionales). Al mismo tiempo, los estratos medios inferiores muestran una creciente distancia del estrato medio-medio, como resultado del deterioro de los puestos de trabajo a que tiene acceso este grupo. Dichos autores concluyen que, entre los países centroamericanos, Costa Rica es el que más cambios reporta en su estructura social como consecuencia de la creciente polarización de las capas medias.

Hallazgos semejantes han conducido a otros autores a plantear que, más que a su desaparición, la clase media está confrontada a un proceso de abierta reestructuración. Mylena Vega (2000) sostiene que durante el período de ajuste estructural la clase media no se ha reducido cuantitativamente. Sin embargo, está experimentando cambios de gran magnitud. Por un lado, el deterioro de los sectores medios ligados al empleo público. Por otro, la conformación de un nuevo grupo de estratos medios altos, ligado a los puestos superiores de empresas transnacionalizadas (presumiblemente, profesionales de alto nivel de calificación en áreas de las ingenierías y la administración de empresas). Se trata del fortalecimiento de algunos sectores medios de extracción rural cuyas actividades productivas se han tornado altamente rentables en el contexto de la promoción de exportaciones de productos no tradicionales; es decir, una elite del campesinado moderno que ha atravesado por procesos exitosos de globalización productiva. El fortalecimiento de un grupo de pequeños patronos que en el pasado tenían un peso relativamente pequeño entre los sectores medios.

Sin embargo, la conclusión más importante que la autora señala, a los efectos de nuestro estudio, es la que sostiene que los ingresos de los sectores medios, durante el período de ajuste estructural, se caracterizan por su creciente inestabilidad. Ello contrasta con lo acontecido en el contexto del modelo desarrollista, donde estos sectores vieron expandirse sus condiciones de vida como consecuencia, entre otros factores, de un aumento sostenido de sus ingresos reales. En otros términos, la inestabilidad de los ingresos termina fomentando el riesgo de empobrecimiento de estos grupos.

Carlos Sojo (1997), por su parte, sugiere que existe un grupo de hogares que muestran dificultades estructurales para superar la pobreza. Entre ellos, se observa un patrón según el cual pueden cubrir por algunos años sus necesidades básicas y, en otros, sucede lo contrario. El

autor acuña la expresión *pobres recurrentes* para referirse a este grupo de familias. Según Sojo, los ingresos y salidas recurrentes de la pobreza por parte de este grupo de familias no son imputables a los hogares, pues estos parecen tener estructuras sociodemográficas bastante definidas. Entonces, la única explicación derivaría de la combinación de dos factores. Por un lado, el desarrollo de políticas sociales que ya no fomentan procesos de movilidad social ascendente de amplio espectro. Por otro, el tipo de ocupación a que accede la mano de obra de estas familias; por lo general, se trata de empleos inestables, de baja productividad y escasa capacidad de remuneración.

La inestabilidad en materia de integración social parece el rasgo distintivo de las familias que conforman el grupo de *pobres recurrentes*. El análisis cualitativo realizado por Sojo revela que entre estos hogares existe un proceso de empobrecimiento real que les impide ascender de manera sostenida en la estructura social. Sin embargo, este autor subraya que los hogares pobres recurrentes no son hogares medios empobrecidos, sino intentos no logrados de movilidad ascendente de grupos pobres. Se trata, por tanto, de hogares que ocupan una posición intermedia entre las familias pobres y las familias que han logrado consolidar su integración social.

Independientemente de la postura analítica de los autores citados, la conclusión es común: un segmento de los sectores medios (consolidados o emergentes) enfrenta crecientes dificultades para garantizar cambios drásticos en sus condiciones de vida. Como consecuencia de la erosión de sus recursos laborales, económicos y políticos, están confrontados a una progresiva inseguridad social. Su nivel de integración social se ha tornado frágil. Esto muestra que para combatir las tendencias de empobrecimiento no basta ya con superar la línea de pobreza. Tal constatación implica reconocer que, en el contexto del nuevo modelo económico, superar la pobreza no es garantía de integración social. Requiere también trascender la zona de riesgo de empobrecimiento, ese campo intermedio, pero en crecimiento, que se ubica entre la integración consolidada y la insatisfacción de las necesidades básicas (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2001).

La identificación de esta problemática conlleva a ampliar el horizonte analítico. Implica reconocer que en materia de integración social no es suficiente un enfoque taxonómico que clasifique a los hogares en tres estratos: indigentes, pobres relativos y no pobres. Es imprescindible incluir un enfoque conceptual y metodológico que permita captar al grupo de hogares no pobres con integración social frágil.

Lo anterior plantea problemas conceptuales y metodológicos de nuevo tipo: ¿cómo identificar a este grupo? ¿Cuántos hogares lo inte-

gran? ¿Qué perfil presenta? Las respuestas a estas preguntas parten, en primer lugar, por reconocer el carácter heterogéneo de los hogares no pobres y llevan a identificar al grupo de hogares no pobres con alta probabilidad de descender hasta el estrato de pobreza relativa.

Para ser consistentes con el enfoque teórico esbozado en el primer capítulo, ello tiene que derivarse de un enfoque metodológico centrado en el análisis de probabilidades, dada la naturaleza probabilística del problema en estudio. Siguiendo la metodología expuesta en el Anexo 1, se ha logrado identificar la magnitud de este grupo social. Los resultados se exponen en el siguiente cuadro.

Cuadro 21

Costa Rica. Hogares por nivel de integración, julio de 2003

Nivel de integración	Hogares	Porcentaje
Pobreza extrema	76.267	8,4
Pobreza relativa	160.825	17,7
Integración con riesgo	159.740	17,6
Integración sin riesgo	513.036	56,3
Total*	909.868	100

Fuente: Elaboración propia con base en EHPM.

* No incluye 141.738 hogares con ingreso ignorado.

La información del Cuadro 21 muestra claramente que los hogares integrados no forman un bloque compacto. La presencia de un estrato social con alta probabilidad de empobrecimiento llama la atención sobre el fenómeno del riesgo de pauperización, como una tendencia emergente. Como se ha explicado anteriormente, se está frente a un fenómeno sistémico.

Puede notarse que la dimensión del estrato de hogares en riesgo de pauperización no es desdeñable. Poco menos de una quinta parte del total de los hogares estaría situado en este grupo. Si se toma en cuenta sólo a los hogares integrados, este indicador se sitúa exactamente en el 23,7%. Una cuarta parte de las familias tradicionalmente consideradas como no pobres están “atrapadas” en una posición donde los episodios de pobreza podrían materializarse en cualquier momento. Lo cual significa que la barrera de integración se ha desplazado hacia arriba.

La identificación del estrato de hogares con integración social frágil, o en riesgo de pauperización social, no apunta hacia la desaparición de la clase media. Tan sólo indica que existen sectores medios que, en el actual modelo de acumulación, están viviendo procesos de deterioro en sus condiciones de vida. Y, quizás más importante, que las

características socio-laborales de la fuerza laboral que integra estos hogares explica, en gran medida, la creciente incertidumbre que en materia de integración social acosa a este grupo.

El reconocimiento de la existencia de este estrato social tiene implicancias de gran relevancia, tanto en términos de la concepción de la estratificación del bienestar social, como en el diseño de políticas públicas que estimulen la inclusión y el desarrollo de la ciudadanía social. En el primer caso, muestra con absoluta claridad las limitaciones de un enfoque conceptual que continúa suponiendo que la integración social se logra con el sólo hecho de superar la línea de pobreza. La evidencia empírica demostrada indica lo contrario. En el segundo caso, el de las políticas públicas, la existencia de este estrato desenmascara el carácter restringido de los enfoques de política social. Cuando la política social responde a estrategias de focalización del gasto entre los grupos más pobres, los hogares en riesgo de pauperización quedan excluidos. Ello tiene un efecto perverso. Al quedar marginados del acceso a los recursos sociales destinados a mitigar los efectos de privación social generados por el modelo de acumulación en curso, se termina elevando el riesgo de empobrecimiento de estos sectores. Como resultado, las políticas sociales focalizadas se muestran doblemente ineficientes. Por un lado, no logran sacar de la pobreza a los hogares que tienen privaciones sociales estructurales. Por otro, no constituyen una red de seguridad social que permita prevenir la incorporación de nuevos hogares a los segmentos de población pauperizada.

Las reflexiones anteriores se sustentan en la hipótesis de que el perfil de los hogares incluidos en el estrato de integración frágil difiere tanto del reportado por las familias pobres como del observado entre las familias que gozan de un nivel de integración social mayor. Si se toma el ingreso per cápita de estos tres grupos puede constatarse esta conjetura. Las familias con integración social consolidada tienen un ingreso per cápita que supera a las del estrato de hogares en riesgo en 1,9 veces. A su vez, el ingreso per cápita de este último grupo supera en 2,9 veces el reportado por las familias pobres.

¿Qué significado tienen estos datos? En sí mismos, lo que indicarían es una mayor proximidad del grupo de familias en riesgo al estrato de hogares en integración social consolidada. Sin embargo, esta comparación sólo tiene sentido si se la historiza. Es decir, si se introduce una consideración diacrónica. Se recordará que al presentar los datos de 1980, se observó una mayor proximidad entre los hogares con integración social restringida y los hogares con integración social consumada. En ese año, la distancia era de 1,4 veces el ingreso per cápita. Como se advierte en 2003, esa distancia ha crecido. Ello puede deberse a dos tendencias que no son mutuamente excluyentes. Puede haber acontecido

que los hogares con integración social sin riesgo hayan logrado mejorar su ingreso per cápita. Sin embargo, también puede ser que las familias del estrato de integración con riesgo hubiesen experimentado pérdidas en sus ingresos. El resultado no es sólo una mayor distancia social entre estos dos estratos sociales, sino también una mayor cercanía del estrato de hogares en riesgo social al de familias pobres.

En 1980 el ingreso per cápita promedio de los hogares con integración social débil representaba 3,8 veces el de los hogares en pobreza relativa, mientras que en 2003 esta distancia se había acortado hasta ubicarse en 2,9 veces. Como es evidente, el estrato en riesgo de pobreza se ha acercado, producto del deterioro en sus ingresos, a los hogares pobres relativos; aunque aún muestra distancias importantes con este grupo. Esto corrobora nuestra tesis de que se trata de un grupo que tiene un perfil propio. De donde se deduce que mezclarlo con los hogares no pobres no parece ser una buena estrategia, ni en el terreno analítico, ni en el campo de las políticas públicas.

Es también de gran importancia observar la territorialidad del fenómeno de riesgo de pauperización. La información indica que más de la mitad de las familias que integran este grupo están radicadas en zonas urbanas. Ello constituye también un rasgo de gran trascendencia. Primero, indica que el fenómeno del riesgo de pobreza tiende a generalizarse en la sociedad. Es decir, es un fenómeno que está presente en zonas tanto urbanas como rurales. En consecuencia, los factores de riesgo, asociados con el funcionamiento del mercado laboral, no se encuentran confinados territorialmente, como acontecía con el fenómeno de la integración social restringida en la fase de modernización nacional y desarrollo intervencionista, cuando se caracterizaba por ser un fenómeno predominantemente rural. En contraposición, en la fase de globalización y cambio estructural, el riesgo de pauperización se presenta como un fenómeno de alcance nacional.

Lo anterior se complementa con la gran concentración que presenta el fenómeno del riesgo social entre los hogares de la Región Central del país. La información muestra que 6 de cada 10 hogares integrantes del estrato de integración con riesgo están radicados en esta región. Esto no es sorprendente. Como ya se ha argumentado, el riesgo de pauperización es una tendencia que afecta predominantemente a familias de estratos medios. Es evidente que estos grupos se asentaron fundamentalmente en la Región Central debido a la concentración del empleo público y, en menor medida, a la presencia de unidades campesinas modernas en este contexto.

El análisis realizado permite formular una primera conclusión de cara a delinear el perfil de las familias que integran el estrato de hogares en integración social frágil. Se trata de hogares cuyo perfil

económico se ha distanciado de las familias con integración social consolidada y, como consecuencia, se ha acercado a los hogares en pobreza relativa. Las familias que integran este grupo se distribuyen, de manera casi proporcional, en zonas urbanas y rurales; de donde se colige que estamos frente a un fenómeno de dimensión nacional. Aunque se muestra una alta concentración de unidades domésticas con elevada probabilidad de empobrecimiento en la Región Central, ámbito históricamente relevante en materia de concentración geográfica de los sectores medios surgidos al calor del desarrollismo.

Las particularidades de los hogares que conforman este grupo bajo inspección no se agotan en los fenómenos señalados. El Cuadro 22 sintetiza algunos de los rasgos de las familias que integran este grupo, y establece las diferencias con las familias pobres y los hogares del estrato superior.

En materia del sexo de la jefatura del hogar, no se observan diferencias estadísticamente significativas en el perfil de las familias en pobreza relativa y de las familias en riesgo de pobreza. Lo contrario acontece si se compara este perfil con el de los hogares en pobreza extrema o el de las familias con integración consolidada. En general, la tendencia muestra que, conforme mejora el nivel de bienestar de las familias, disminuye la importancia de la jefatura femenina. Lo destacable es que se evidencia una mayor incidencia de la jefatura femenina entre las familias con riesgo de pobreza en comparación con las ubicadas en el estrato superior. En conclusión, la información revela que, con respecto a esta variable, el perfil de las familias en riesgo es semejante al de las familias en pobreza relativa y difiere sustantivamente del de las familias con integración social consolidada.

Dos indicadores adicionales han sido considerados para demostrar la especificidad del perfil de las familias del estrato que se está comentando. El primero es el tamaño del hogar. La información contenida en el Cuadro 22 muestra que, en promedio, las unidades domésticas en riesgo de pauperización son las de menor tamaño, siendo las diferencias entre los cuatro grupos significativas. Esto indica que, en promedio, el tamaño del hogar se incrementa entre las familias pobres. A mayor número de miembros de hogar, mayor la severidad de la pobreza. Sin embargo, no puede decirse lo inverso, ya que las familias del estrato de integración consolidada reportan un mayor tamaño que las del estrato en riesgo. Lo importante es que el tamaño del hogar de las familias de este último grupo las ubica en una posición de mayor proximidad al estrato superior.

Cuadro 22

Perfiles sociodemográficos según nivel de integración social, julio de 2003 (promedios)

	Hogares				p <*
	Pobreza extrema	Pobreza	Integración con riesgo	Integración consolidada	
Escolaridad de la PEA (promedio de años)	4,82	5,83	5,40	10,70	0.000
Sexo de la jefatura (%)					
Masculina	62,20	74,00	72,80	77,70	0.000
Femenina	37,80	26,00	27,20	22,30	
Total PEA del hogar	1,16	1,31	1,21	1,93	0.000
Tamaño del hogar	4,60	4,35	2,91	3,89	0.000
Total de desocupados	0,25	0,15	0,13	0,06	0.000

Fuente: Elaboración propia con base en EHPM.

* Prueba t para variables métricas y prueba chi-cuadrado para variables no métricas.

El segundo indicador se refiere a la distribución del desempleo entre las familias según nivel de bienestar social. Se observa que las familias más afectadas por el desempleo son las que se ubican en el estrato de pobreza extrema. Se manifiesta también una tendencia clara, pues conforme mejora el nivel de bienestar del hogar descende el número de personas desempleadas. Es importante observar la mayor proximidad del grupo de hogares en riesgo al de las familias en pobreza relativa y, al mismo tiempo, su creciente distancia de las familias del estrato superior. En general, se observa que las familias en riesgo de pauperización muestran una situación en la que el fenómeno del desempleo sigue presente entre su fuerza laboral, aunque con magnitudes inferiores a las reportadas por las familias pobres. Nótese que el indicador muestra que las diferencias son estadísticamente significativas, lo cual se mantiene, por ejemplo, si la comparación se realiza sólo entre los hogares en pobreza relativa y las familias del estrato de riesgo.

El tercer indicador seleccionado está referido al recurso laboral del que disponen los hogares según el estrato en que se encuentren. El rasgo más significativo que se desprende de la lectura de los valores de este indicador da cuenta de la existencia de cierta polaridad. Las unidades domésticas que integran el estrato superior disponen de más fuerza laboral. En promedio reportan poco menos de dos miembros laboralmente activos por hogar. En el otro extremo se encuentran el resto de familias, las cuales muestran un promedio considerablemente inferior. El promedio tiende a caer conforme el nivel de pobreza del hogar se intensifica, aunque los hogares en riesgo constituyen una excepción, pues cuentan con menos recursos laborales que las familias en pobreza relativa.

Así, tales indicadores señalan que el perfil de los hogares en riesgo de pobreza dista tanto del de las familias del estrato superior como del de las familias pobres. También se evidencia la mayor proximidad de su perfil al correspondiente a los hogares en pobreza relativa en algunos campos. Esto permitiría validar la tesis de que se trata de un grupo de hogares cuyas características sociodemográficas y laborales no siguen el mismo patrón de las familias que han accedido a una condición de bienestar social muy consolidada.

Resulta importante establecer también algunas precisiones sobre el perfil de las familias que conforman este grupo, considerando los rasgos más sobresalientes en términos de la inserción laboral de sus integrantes. Para tales efectos, es pertinente hacer la diferenciación rural y urbana a efectos de obtener algunas conclusiones que trasciendan la mera descripción.

En las zonas rurales, el rasgo más sobresaliente de las familias en riesgo de pobreza, en materia laboral, es la movilización de la mayor parte de su mano de obra hacia ocupaciones salariales de alta precariedad laboral. Esto indica que, en términos de reproducción social, ha perdido peso la economía de subsistencia típicamente campesina, al tiempo que ha adquirido relevancia la inserción subordinada, bajo modalidades salariales de alta flexibilidad. Es decir, estaríamos frente a un modelo de acumulación que ha favorecido los procesos de descampesinización y, en su lugar, emergen tendencias de proletarización signadas por el comportamiento de empresas cuyas actividades productivas están ligadas a los circuitos globales de acumulación. Sin embargo, no se trata de cualquier tipo de proletarización, sino de una que acontece en un momento de creciente desregulación y flexibilidad laboral. Esto se ve reflejado en el mayor promedio de fuerza laboral de hogares en riesgo de pobreza en este tipo de empleo asalariado. Nótese que esto mismo estimula un mayor riesgo de pauperización.

Aunque, como hemos mencionado, la economía campesina ha perdido centralidad entre el grupo de hogares en riesgo, no ha dejado de ser importante. Se constata la presencia de hogares campesinos con alto riesgo de pauperización, especialmente para aquellos hogares que favorecen la integración de su mano de obra en el autoempleo agrícola con capacidad de atender las necesidades de reproducción básicas. Esta modalidad de integración laboral constituye, según nuestros datos, la segunda forma de inserción más recurrente entre este tipo de familias. Empero, se trata, muy probablemente, de un campesinado con viabilidad incierta. Esto se da en el contexto de políticas que han dirigido el crédito, las facilidades productivas y la asistencia técnica hacia los nuevos cultivos de exportación, así como de una creciente amenaza derivada del avance de la apertura comercial. La economía campesina,

que permite la subsistencia pero no el dinamismo, es ubicada en una condición de alta vulnerabilidad productiva. Nuevamente, el riesgo se dispara y es muy probable, según la evolución acontecida durante el período de maduración del nuevo modelo económico, que este grupo tienda a polarizarse.

Continuando la tendencia observada en el país en las últimas dos décadas, la mayoría de los productores campesinos que conforman este grupo perderán su posición en el mercado, dada su menor competitividad internacional. En consecuencia, pasarían a formar parte del grupo de familias campesinas empobrecidas. La concreción de esta tendencia dependerá no sólo de las dinámicas estructurales en curso, sino también de la capacidad de acción colectiva de los pequeños productores no globalizados. Es decir, se trata de una tendencia que aún no está consumada. Empero, no hay razones para ser optimista. La eventual firma del tratado de libre comercio entre Costa Rica y Estados Unidos podría acentuar este proceso.

Es preciso plantear una salvedad con respecto al pronóstico dado. Cabe la posibilidad de que las familias intenten contrarrestar esta amenaza diversificando las inserciones laborales de sus integrantes laboralmente activos. Es decir, propiciando procesos de descampesinización relativos mediante la movilización de la mano de obra joven y de las mujeres adultas hacia segmentos de la economía rural no agrícola. Si esta movilización es efectiva y tiene lugar en ámbitos que se articulan con dinámicas económicas en expansión, como por ejemplo el turismo rural comunitario, algunas familias podrían contener las tendencias de pauperización derivadas del deterioro de la economía campesina tradicional. Se explicaría así el hecho de que el deterioro del sector de productores de autoconsumo no implique un aumento de la incidencia de pobreza rural. Sin embargo, como hemos señalado, esta es una línea de investigación que habrá que explorar en el futuro.

Por otra parte, en términos urbanos se pudo observar una mayor diversificación de las inserciones laborales de la fuerza de trabajo de los hogares en riesgo de pauperización. Esta diversificación de las “estrategias laborales” no implica un mayor acceso a los empleos de calidad, ya sea que se transite por la vía de la salarización o del autoempleo.

La información confirma que las inserciones predominantes de la mano de obra de los hogares que conforman este estrato son, en orden decreciente de importancia: el autoempleo intermedio, el autoempleo de subsistencia y el empleo asalariado de alta precariedad. Los dos primeros indicarían que, en el nuevo contexto económico, el autoempleo está experimentando procesos de deterioro y polarización. Esto es quizás comprensible si se toma en cuenta que las actividades más dinámicas del sector son objeto de una creciente competencia

como resultado de la apertura comercial. Esto ha inducido la adquisición de bienes industriales de bajo costo, tanto como la introducción masiva al país de productos de segunda mano (ropa usada) que tiende a erosionar el dinamismo del autoempleo. Por su parte, el deterioro de la posición de los grupos medios reduce el mercado solvente que en las ciudades favorecía el dinamismo de unidades productivas de mayor capacidad acumulativa.

Se ha observado, en el caso del autoempleo urbano, una tendencia al predominio de aquellos segmentos más cercanos a la economía de la pobreza (subsistencia e intermedio). Este patrón termina incrementando las chances de pauperización de los hogares que movilizan su mano de obra hacia este tipo de ocupaciones.

En el caso del empleo asalariado, también se verifica que las familias en riesgo han sido forzadas a insertar su fuerza laboral en los empleos de mayor precariedad. Es evidente que este tipo de ocupaciones no favorecen una creciente seguridad en las condiciones de vida y tornan frágiles los logros en bienestar social. Difícil es imaginarse cómo, con inserciones laborales signadas por la precariedad y la subsistencia, estos hogares podrían abandonar, en un movimiento hacia arriba, el estrato de familias acosadas por las tendencias de pauperización relativa.

La conclusión más relevante indica que los hogares en condición de riesgo de pobreza insertan su mano de obra en los sectores del mercado de trabajo que poseen menor capacidad para favorecer procesos de integración social e incrementan los chances de empobrecimiento.

Por donde quiera que se analice el fenómeno, el nuevo modelo de acumulación indujo transformaciones en la estructura productiva, en la conformación y dinámica de los mercados de trabajo y en la estructura social que han tornado frágil la posición social de muchas familias no pobres. El riesgo de pauperización se constituye, en estos casos, en una nueva amenaza que pone en peligro la satisfacción de las necesidades vitales para grupos de población que, en el pasado, lograron superar la pobreza. En la actualidad, Costa Rica se enfrenta al desarrollo de nuevas políticas públicas que eviten la pauperización de las familias que conforman este estrato social. Resulta importante recordar que, en términos cuantitativos, este grupo tiene el mismo peso que el de los hogares en pobreza relativa. También, que su situación es muy volátil y cambiante. De manera tal que pequeñas alteraciones en la composición del hogar o en el ciclo económico tienen grandes impactos sobre sus condiciones de vida. Hasta la fecha, las caídas en el nivel de vida de estos hogares han sido relativas y coyunturales. Sin embargo, nada asegura que en el futuro este patrón se mantenga.

Es prioritario diseñar un nuevo esquema de política social que atienda la problemática particular de este grupo de familias. Final-

mente, si el funcionamiento del mercado crea inseguridades vitales y amenaza las condiciones de reproducción social de esos hogares, corresponderá a la sociedad, por medio de la constitución de una nueva red de seguridad social, restablecer el equilibrio en materia de inclusión social.